

42.<sup>a</sup> REUNION — Continuación de la 29.<sup>a</sup> SESION ORDINARIA

SEPTIEMBRE 21 DE 1933

Presidencia del doctor JULIO A. ROCA, Vicepresidente de la Nación  
y del doctor RUDECINDO S. CAMPOS, Vicepresidente provisorio del Senado

**Senadores presentes:** Arancibia Rodriguez Alberto, Arenas Mario, Bravo Mario, Bruchmann Carlos A., Campos Rudecindo S., Castillo Ramón S., Ceballos Mariano P., Ceballos Reyes Raúl, Galíndez Francisco R., Matienzo José Nicolás, Montenegro Pío, Palacios Alfredo L., Porto Carlos R., Sánchez Sorondo Matías G., Sahtamarina Antonio, Serrey Carlos, Torre Disandro de la, Vera Cruz, Vera Ocampo Horacio, Vidal Juan R.

**Senadores ausentes, con aviso:** Cantoni Aldo, Correa Francisco E., Eguiguren Atanasio, Laurencena Eduardo, López Peña Lucio, Patrón Costas Robustiano, Rothe Guillermo.

**Senadores ausentes, con licencia:** Lubyry Juan José, Villafañe Benjamín.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

- I.—Comunicaciones del Poder Ejecutivo: Mensaje y proyecto de ley sobre adquisición de material quirúrgico para el Hospital Militar Central y hospitales divisionarios. (A la Comisión de Presupuesto).
- II.—Mensaje y proyecto de ley sobre adquisición de galpones metálicos para Aviación, Comunicaciones y Sanidad del Ejército. (A la Comisión de Presupuesto).
- III.—Comunicación oficial.
- IV.—Peticiónes particulares.
- V.—Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
- VI.—Despachos de comisiones.

2.—Moción del senador Palacios para tratar sobre tablas los despachos sobre homenajes a don Paul

Groussac y al ex concejal y ex diputado nacional don Antonio Zaccagnini. Se aprueba.

- 3.—Moción del senador Castillo para tratar sobre tablas el proyecto de ley por el que se autoriza a erigir un monumento a la memoria del general San Martín en Posadas, territorio de Misiones. Se aprueba.
- 4.—Consideración del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales en el proyecto de los senadores Bruchmann, Laurencena, Sánchez Sorondo, de la Torre, Palacios y Correa, referente al homenaje a don Paul Groussac. Se aprueba.
- 5.—Consideración del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales en el proyecto, en revisión, referente a un homenaje al ex concejal y diputado nacional don Antonio Zaccagnini. Se aprueba. Es ley.
- 6.—Consideración del despacho de la Comisión de Presupuesto en el proyecto, en revisión, autorizando la inversión de \$ 20.000 m.n. para erigir un mo-

Septiembre 21 de 1933

CAMARA DE SENADORES

42ª Reunión. Cont. de la 29ª Sesión ord.

- umento a la memoria del general San Martín en Posadas (Misiones). Se aprueba. Es ley.
- 7.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Códigos en el proyecto, en revisión, sobre reforma de los artículos 154 a 160 del Código de Comercio.
- 8.—Moción de orden del senador Serrey para que se comuniquen a la Cámara de Diputados las sanciones del Senado.
- 9.—Continúa la consideración del asunto a que se refiere el número 7 del sumario.
- 10.—Cuarto intermedio.

—En Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de Septiembre de 1933, siendo la hora 16 y 35 minutos, dice el:

**Sr. Presidente.** — Continúa la sesión.  
Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

## 1

## ASUNTOS ENTRADOS

## I

## Comunicaciones del Poder Ejecutivo

**Material quirúrgico para el Hospital Militar Central y hospitales divisionarios. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.**

Buenos Aires, 21 de Septiembre de 1933.

*Honorable Congreso de la Nación,*

*Cámara de Senadores.*

En fecha 23 de Mayo de 1928, fué presentado por el Poder Ejecutivo a la consideración del Honorable Congreso, el mensaje que a continuación se transcribe:

«El ejército, siguiendo la evolución de progreso y orden de todo organismo militar moderno, ha alcanzado un grado de adelanto en sus distintas actividades, que a la par que se le dota del material y los elementos de guerra indispensables para llenar la misión que la patria le impone, se hace necesario, también, contemplar los servicios complementarios para la conservación de vida y energía de la tropa, de acuerdo al desarrollo y adelantos alcanzados como consecuencia de la última guerra europea, energías que hay que conservar tanto en la paz donde se elabora la victoria, como en la guerra, donde se rinde la vida.

«El Poder Ejecutivo con convicción plena de la misión que en suerte le toca cumplir al ejército y del deber que tiene de prestar preferente atención a la salud de los jóvenes conscriptos, ha creído que debe prestarle una preferente atención al capítulo Sanidad Militar.

«El aumento de los efectivos, habilitación de hospitales divisionarios, instalación de laboratorios, servicios anexos, etcétera, hace necesario dotarlos de los aparatos y elementos modernos que la ciencia aconseja.

«De acuerdo con este concepto, el Poder Ejecutivo ha preparado el adjunto proyecto de ley que somete a la consideración de vuestra honorabilidad, inspirado en la confianza absoluta que dispensan a nuestra institu-

ción militar, los hombres que dirigen los destinos de nuestra patria.»

Impulsado el Poder Ejecutivo por estas necesidades cada vez más apremiantes que exigían disponer lo antes posible del material aludido, y contando con que ese proyecto de ley sería sancionado favorablemente por vuestra honorabilidad, autorizó la compra de aquellos materiales más indispensables, imputando su importe provisionalmente a la ley número 11.266.

El mensaje de referencia iba acompañado del respectivo proyecto de ley, autorizando al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de cuatrocientos veinte mil pesos moneda nacional (420.000) en la adquisición de material quirúrgico para los servicios de electrorradiología, vías urinarias, odontología y ginecología del Pabellón de Consultorios externos del Hospital Militar Central y hospitales divisionarios.

Como dicho proyecto no ha tenido sanción y siendo necesario reintegrar a la ley de armamentos Nº 11.266, los fondos invertidos a tales fines, es por lo que se somete a la consideración de vuestra excelencia un nuevo proyecto de ley.

La cantidad solicitada ha sido reducida a ciento cincuenta y cuatro mil noventa y dos pesos con 32/100 moneda nacional (154.092,32), importe éste a que ascendió la adquisición del material sanitario considerado indispensable.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.  
Manuel A. Rodríguez.

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados de la Nación. etc.*

Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo para transferir con imputación a la presente ley, la suma de ciento cincuenta y cuatro mil noventa y dos pesos con treinta y dos centavos moneda nacional (\$ 154.092,32), invertidos en la adquisición de material quirúrgico para los servicios de electrorradiología, vías urinarias, odontología y ginecología del Pabellón de Consultorios externos del Hospital Militar Central y hospitales divisionarios, cuyo importe fué atendido provisoriamente con imputación a la ley número 11.266.

Art 2º — Comuníquese, etc.

Manuel A. Rodríguez.

—A la Comisión de Presupuesto.

## II

**Adquisición de galpones metálicos y obras afines para Aviación, Comunicaciones y Sanidad del Ejército. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.**

Buenos Aires, 21 de Septiembre de 1933.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

*Cámara de Senadores.*

Con fecha 23 de Mayo de 1928 fué presentado por el Poder Ejecutivo a la consideración del Honorable Congreso el mensaje que a continuación se transcribe:

«E. material de aviación, comunicaciones y sanidad, que, de acuerdo a las necesidades creadas por la impor-

autoriza al Poder Ejecutivo a contribuir a la erección de un monumento a la memoria del general San Martín, en Posadas (Misiones); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo de la Nación, a contribuir con la suma de veinte mil pesos moneda nacional de curso legal (\$ 20.000 m/n), a la erección de un monumento nacional a la memoria del general San Martín, en Posadas, capital del territorio de Misiones.

Art. 2º — Los gastos que demande la presente ley, se imputarán a rentas generales mientras no se incluyan en la ley de presupuesto general de la Nación.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, Septiembre 20 de 1933.

*R. S. Campos. — M. G. Sánchez Soriano.  
— E. Laurencena. — C. A. Bruchmann.*

**Sr. Presidente.** — Está en discusión.

**Sr. Campos.** — Pido la palabra.

Este proyecto, venido en revisión de la Cámara de Diputados, constituye, en realidad, el mejor y más elocuente homenaje que se puede tributar al libertador de América.

El territorio de Misiones, no obstante ser fronterizo, aún no tiene un monumento a San Martín. Todas las capitales de provincia lo tienen, y por razones que no es posible determinar, Posadas, capital de aquel territorio, aún no cuenta con un monumento a su memoria, lo que indudablemente constituye una deuda de honor y de patriotismo hacia el Libertador, que se cumple por este proyecto de ley en revisión.

Por otra parte, Posadas, capital del territorio de Misiones, tiene una población de 40.000 habitantes; tiene colegio nacional, escuela normal, escuela de artes y oficios, templos, etcétera. Es indispensable, entonces, que cuente, también, con un monumento a San Martín, que ha de constituir por su finalidad y por los propósitos que persigue, una demostración al sentimiento patriótico de aquel pueblo.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, constituida por todos los sectores, ha despachado este asunto por unanimidad, y la Cámara de Diputados lo ha sancionado aún sin informe de Comisión. El mejor fundamento, pues, es el voto unánime que aquel Cuerpo produjo, y que en este momento el Senado ha de reproducir, seguramente, con igual propósito y criterio.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar en general el despacho de la Comisión.

—Se vota y resulta afirmativa, así como en particular.

**Sr. Presidente.** — Queda convertido en ley. Se va a considerar la orden del día.

7

REFORMA DE LOS ARTICULOS 154 A 160 DEL  
CODIGO DE COMERCIO

**Sr. Castillo.** — Pido la palabra.

Yo creo, señor presidente, que el Código de Comercio, debe ser modificado en lo relativo al despido y a la interrupción del contrato de empeño, que celebren los empleados de comercio con sus principales. Pero disiento en cuanto a la amplitud que da a la reforma la mayoría de la Comisión, y en cuanto a los efectos y alcances que le atribuye la minoría de la misma.

Si tratásemos de la legislación sobre el trabajo comprendiendo a todos los empleados y a todos los empleadores, coincidiría en muchos de los puntos fundamentales que contienen los dos despachos de la Comisión, en mayoría y en minoría. Pero no tratamos de eso: nos proponemos simplemente reformar el Código de Comercio que es una rama del derecho común. Es un derecho de excepción que legisla el contrato de empeño y dentro de eso mismo el que se refiere a determinadas personas que se designan dentro de los límites del campo de acción de este contrato. Considero peligroso, sumamente peligroso pasar los límites de ese campo de acción para introducir principios de otro derecho que está en formación y cuya incorporación puede traer confusiones y muy graves perturbaciones para el comercio y para la industria.

No es modificando un artículo del Código de Comercio como ha de asegurarse la reforma social. Yo creo que pueden reformarse los artículos del código y las instituciones que éste crea para hacerlas adaptables a las circunstancias actuales, siempre que se conserve su estructura general y no se introduzcan principios que sean una negación de lo que ese código establece.

El señor senador por la Capital, en su brillante exposición, nos ha presentado un cuadro del estado de la legislación extranjera, de las convenciones, de los reglamentos de las compañías y de los usos generalmente establecidos, todo lo cual demuestra la amplitud de este

tema y lo difícil que es contemplar en las previsiones de un solo artículo del código ese vasto programa legislativo.

Nos decía el señor senador que nosotros nos resistimos a aceptar modificaciones de los códigos. Es un error. Nosotros, lo que no queremos es que se trastorne el orden jurídico, modificando desconsideradamente sus instituciones; pero aceptamos, en cambio, que se modifiquen éstas, para adaptarlas a las necesidades sociales, conservando, como he dicho antes, los principios fundamentales que las informan.

El señor senador por la Capital, haciendo una figura, nos decía que los acontecimientos han seguido rápidamente como un tren en marcha, mientras los que los esperaban quedaron en la estación, aludiendo al retardo en legislar. Más o menos son los términos que expresaba el señor senador.

Efectivamente, dentro de estos conceptos generales, consideramos que el derecho puede perfeccionarse sólo por evolución y que la codificación debe llegar cuando el derecho, que es la vida misma de los pueblos, se impone al legislador.

En una época, hombres animosos e inteligentes, tomaban el primer tren que encontraban y emprendían un viaje, olvidando la provisión de todo viajero, que es la de llevar los avíos necesarios para el largo trayecto. El tren marchó y esos hombres animosos iban con rumbo desconocido. Era esto, hace alrededor de 30 años. Veamos lo que hicieron los que quedaron en la estación, según la frase gráfica del señor senador. El presidente Roca con su ministro González, remitía al Congreso un proyecto de legislación de trabajo que ha merecido los más honrosos elogios de todos los que se han ocupado de él. Llegó a decirse que era la obra más perfecta sobre esa materia que se había proyectado en América y en Europa. Poco tiempo después, un presidente argentino, al hacerse cargo de su puesto, declaraba solemnemente que aceptaba el programa mínimo del Partido Socialista.

Pasaron los tiempos, sucedió la Gran Guerra, se produjo la catástrofe que todos conocemos, la conmoción que determinó el derrumbamiento de muchos poderes políticos; las bases fundamentales del derecho privado se conmovieron en sus cimientos. El entonces diputado doctor Sánchez Sorondo, presentó un proyecto sobre sindicalismo, siguiendo la opinión de los pensadores de esa época que fijaron su atención en esas corporaciones sindicales para salvar al mundo de las graves consecuencias de

la catástrofe en cuanto afectaban el orden jurídico y el orden económico.

Esos tres acontecimientos en tres épocas distintas, presentaban una brillante oportunidad para que los hombres animosos a que antes me he referido nos hubieran traído un plan de conjunto, ellos, que están o que afirman que están siempre en la línea avanzada. Vienen en cambio, a pedirnos cuando estamos tratando un modesto artículo del Código de Comercio, que les facilitemos los medios para introducir por un resquicio de la ley toda la base de una construcción que se relaciona con la verdadera legislación social.

¡Lo que no queremos es que se nos destruyan nuestras instituciones! No queremos los remiendos de que hablaba el señor senador por la Capital. Queremos obra constructiva y protestamos si se nos destruye la obra a que antes me he referido —, el proyecto del doctor González —, que contemplaba los múltiples aspectos de este asunto. Primero lo combatieron, después lo fraccionaron y así son las leyes que tenemos hoy, de orden social, sin orden ni armonía. Es necesario haber sido juez para haber palpado las dificultades del sistema de legislación, para poder decir lo que yo afirmo con toda conciencia en este momento.

No acepto, pues, el reproche, con que siempre se nos señala cuando defendemos el texto de una ley, o una institución, cuando nos levantamos defendiendo la Constitución. No es que seamos retardatarios ni reaccionarios, es que estimamos la tradición argentina, amamos nuestras instituciones y cuando cualquiera intenta, no diré vulnerarlas, sino desmejorarlas, nos levantamos para defenderlas y con todo derecho exigimos a los que las critican, que nos presenten un nuevo plan, una organización institucional que venga a reemplazar las anteriores.

**Sr. Palacios.** — El señor senador se olvida que la sanción de la Cámara de Diputados ha sido por unanimidad, de manera que el cargo que está formulando es para los miembros de su propio sector.

**Sr. Castillo.** — No me refiero a la sanción de la Cámara de Diputados. Me refiero a las expresiones pronunciadas en el seno de la Cámara de Senadores.

**Sr. Palacios.** — Lo que está en discusión es el despacho.

**Sr. Presidente.** — Pero lo que no es discutible es que no debe ser interrumpido el orador.

**Sr. Palacios.** — Con permiso de la Presidencia, diré que lo lamentable es que el señor senador, con motivo de la reforma del artículo

157 de Código de Comercio, se erija en el monopolizador del sentimiento patriótico y del amor a las tradiciones argentinas.

**Sr. Castillo.** — Absolutamente; yo sé que el señor senador es nacionalista, que es argentino, y que quiere a la bandera....

**Sr. Palacios.** — Y estoy en absoluto de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor senador, y hasta considero que expresa ideas de lo más reaccionarias posible.

**Sr. Castillo.** — No, señor senador, no está en desacuerdo, pues en muchos puntos está de acuerdo con lo que yo he expresado.

**Sr. Palacios.** — Ya le he dicho en otra ocasión al señor senador, que a pesar de haber sido mi profesor, no puedo, desde esta banca, reconocer ninguna de sus lecciones. Por eso he dicho que estoy en absoluto de desacuerdo.

**Sr. Castillo.** — Yo no recuerdo haberlo visto jamás en mis clases.

**Sr. Palacios.** — Tiene muy mala memoria el señor senador.

**Sr. Castillo.** — Debe haber sido algún alumno de esos que no van nunca a clase.

Bien, señor presidente, continúo.

El señor senador por la Capital nos ha traído antecedentes muy ilustrativos sobre la legislación comparada y la forma en que son considerados y resueltos estos asuntos por los usos y prácticas del comercio.

Yo sé que la legislación comparada tiene suma importancia cuando se trata de dictar una ley de esta naturaleza, porque nos trae la enseñanza de la experiencia de otros países, siempre que tengamos cuidado de estudiar las instituciones de esos países, para poder establecer el verdadero alcance de la legislación respectiva.

Pero, en cambio, el señor senador ha omitido considerar lo que era más fundamental para justificar la ley que se discute, y es la forma en que se ha manifestado el fenómeno en la República Argentina, cómo ha evolucionado, y cómo se ha presentado al legislador con exigencias perentorias.

El Código de Comercio, al tratar sobre el despido, sólo se refiere a los factores y dependientes de comercio. Son factores los que ejercen una representación en el orden interno o externo de los negocios; y dependiente, el que representa al principal en el orden interno de la casa o para realizar una o más operaciones determinadas que le haya confiado el principal.

El código no se ha referido en estos textos

a otros auxiliares del comercio. En la época en que se dictó, se consideraba que a esos funcionarios que desempeñaban tareas de confianza, les sería sumamente difícil encontrar otra colocación, y entonces se consideró equitativo establecer en la ley el aviso anticipado de un mes para salvar esas dificultades. La jurisprudencia de nuestros tribunales, en la primera época, interpretó restrictivamente ese precepto legal, considerando que establecía en realidad un privilegio, un principio de excepción con relación a todos los demás empleados que se hallaban en idénticas condiciones.

Pero el comercio ha evolucionado, las casas de comercio y las industrias han multiplicado su personal; la división del trabajo ha determinado la especialización, y las especialistas se colocaron entonces, en idénticas condiciones que los representantes, a que se refería el texto del Código de Comercio.

La jurisprudencia, apreciando esta circunstancia, estableció que tenían derecho al mes de indemnización los demás auxiliares del comercio que hubieran colaborado en los negocios del principal, comprometiendo sus actividades profesionalmente.

Este concepto, muy adelantado de nuestra jurisprudencia, fué inspirado por la doctrina y la jurisprudencia italianas, y ésta, a su vez, se fundaba en principios del derecho alemán.

Desde entonces, la jurisprudencia de nuestros tribunales estableció que todos los factores, dependientes y auxiliares del comercio que obligaren su actividad profesionalmente para colaborar en los negocios del principal, tenían derecho a la indemnización en los mismos términos que los factores y dependientes a que se refería expresamente el código.

El comercio, alarmado por esta extensión que daba la jurisprudencia al texto legal, formuló contratos con una cláusula en virtud de la cual se renunciaba al beneficio que acordaba el código a este respecto. Hubo vacilaciones en la jurisprudencia, pero, por último, llegó a establecerse que esas renunciaciones eran nulas, porque la disposición legal era de orden público, y las prescripciones de orden público no pueden ser derogadas por la convención.

Desde ese momento, en la jurisprudencia quedaron aceptados estos dos conceptos: el alcance que debe darse al término empleado de comercio y el carácter que debe atribuirse a los beneficios que acuerda la ley.

El comercio, las grandes empresas principalmente, no sólo han respetado estas disposiciones

dé la ley y de la jurisprudencia a que acabo de referirme, sino que han llegado a conceder a los empleados y dependientes, vacaciones anuales y gratificaciones extraordinarias, según sea el éxito de los negocios revelado por los balances respectivos.

Cuando los empleados de comercio, los factores y dependientes se agitan y piden la ley, no es para que ésta se haga extensiva a todos los obreros, sino para que se les garantice lo que consideran con justo título una conquista, porque si bien existe la jurisprudencia a que me he referido y la práctica constante de la mayor parte de las casas de negocios, eso no basta para los empleados de comercio, puesto que existen muchas otras casas que no reconocían iguales derechos y muchas otras que disuerten los mismos derechos que ha declarado la jurisprudencia y aun los que establece la ley. Ellos lo que quieren es definir esa situación que ha establecido la jurisprudencia, los usos y prácticas argentinas.

La Comisión en mayoría establece el despido no solamente para los empleados de comercio a que acabo de referirme, sino también para los obreros que ocupan los comerciantes en el desenvolvimiento de sus operaciones comerciales.

Yo juzgo que la Comisión, en esta parte, incurre en un grave error. Estas leyes deben fijar la atención en el empleado para protegerlo, porque son leyes de protección, y en la función que desempeña para regular esa protección, porque no todos desempeñan la misma función, ni todos merecen el mismo grado de protección.

La comisión, en vez de observar estos principios, que son fundamentales, ha fijado la atención en el empleador y así establece que todo empleado u obrero, que trabaje para un comerciante, gozará de los beneficios de la ley; todos los empleados y obreros que trabajen para los no comerciantes, no merecen la protección de la ley para el proyecto de la mayoría. Un empleado de escritorio de un comerciante merece la protección y el empleado de escritorio de un ganadero, que está al lado, no la merece. El mayordomo, los obreros de las estancias, el obrero frentista que trabaja con graves peligros en una construcción, esos no merecen la protección de la ley; pero el portero del comercio, encargado de su limpieza, ese sí la merece.

Esos errores en que ha incurrido la Comisión parten de la base de haberse confundido aquellos dos conceptos fundamentales. Vuelvo a re-

petir, no se trata de gravar al empleador, sino de proteger al empleado y de protegerlo razonablemente, según la naturaleza de la función que desempeñe.

Yo se bien que es muy difícil distinguir el «empleado» del «obrero». En la Conferencia Internacional del Trabajo se ha tratado de dar con un término comprensivo de esa distinción, para recomendar a la legislación de todos los países la diferencia de estas dos clases de trabajadores, en la imposibilidad de comprenderlos a todos en una misma previsión; sin embargo, nuestra legislación y la doctrina general, el uso y la práctica corriente, establecen estas dos grandes divisiones: el trabajo intelectual y el trabajo manual sometido a horario.

El trabajo intelectual es lo que ha sido clasificado para aplicarlo a todos los empleados de comercio; en términos generales, el trabajo manual sometido a horario es lo que corresponde a los obreros.

El Decreto real italiano de 1924 excluye expresamente a los que comprometen exclusivamente su mano de obra al legislar para los empleados privados; no solamente para los empleados privados de los comerciantes, sino para todos los empleados privados, cosa muy distinta, por cierto, de los principios que incorpora la mayoría y la minoría de la Comisión en el proyecto que discutimos. De todas las leyes de que nos ha dado una noticia exacta el señor senador por la Capital, todas han comprendido a empleados y obreros sin distinción alguna o han excluido expresamente a los obreros. Pero no hay ninguna que comprenda a los empleados y obreros exclusivamente de una rama del comercio o de la industria, excluyendo a todos los demás, porque ya no sería una ley social, sino antisocial.

**Sr. Bravo.** — Hay varias leyes.

**Sr. Castillo.** — ¿Podría citarlas, señor senador?

**Sr. Bravo.** — Está la legislación de Bolivia, de Perú, de Chile, de Méjico, de Polonia.

**Sr. Castillo.** — ¿Para los comerciantes?

**Sr. Bravo.** — Para empleados y para obreros.

**Sr. Castillo.** — Sí, señor, es lo que afirmo.

**Sr. Bravo.** — Para empleados del comercio y de la industria.

**Sr. Castillo.** — Yo acabo de establecer lo que debe entenderse por empleado y por obrero y mi afirmación perentoria es que no existe ninguna ley, que yo conozca, — puede ser que haya alguna — en que se imponga a los comerciantes, por ejemplo, la obligación de indemnizar.

zar a los empleados y obreros y que se excluya a los no comerciantes de pagar a esos empleados y a esos obreros que desempeñan exactamente las mismas funciones.

**Sr. Arancibia Rodríguez.** — ¿Me permite, señor senador, que conteste sus palabras?

Esa ley que el señor senador no recuerda, es el Código de Comercio de la Nación Argentina. El estado de cosas a que el señor senador se opone, es el estado de cosas actual de la legislación. Nosotros lo reparamos parcialmente y no totalmente, como lo desearía el señor senador y como lo deseamos todos. Ya lo advertí en mi informe: los empleados de comercio tienen actualmente una situación de excepción que no tiene ninguno de los otros empleados ni obreros sujetos a la legislación civil, porque el Código de Comercio, desde 1889, tiene los privilegios que el señor senador está denotando como si los incorporáramos recién en este despacho, que son: el despido con un mes de sueldo, las enfermedades inculpables y la reparación por todo daño que se les produzca en el ejercicio de sus tareas.

**Sr. Bravo.** — Son principios que existen desde hace 100 años.

**Sr. Arancibia Rodríguez.** — De manera, que lo único que hacemos es mejorar parcialmente lo que no podemos remediar totalmente.

**Sr. Castillo.** — Yo acabo de explicar cómo ha sido la evolución de la jurisprudencia argentina para llegar a ese concepto, llamándose empleado al que obliga o aplica su actividad preferentemente respecto de su principal, y el obrero es la mano de obra sometida a horario...

**Sr. Arancibia Rodríguez.** — Es otra cuestión.

**Sr. Castillo.** — ... y he afirmado que en nuestra legislación nunca se ha comprendido a los obreros dentro de la indemnización del artículo 154 del Código de Comercio; siempre se ha comprendido a los empleados de comercio. Y eso no por la ley, sino por la evolución de la jurisprudencia, como acabo de demostrarlo recientemente.

Bien, señor presidente. Decía que el decreto real italiano del año 1924, es el que ha inspirado a la mayor parte de las leyes que se han dictado en la última época, a juzgar por la fecha de esas leyes y por los principios que han incorporado. No quiero fatigar, por cierto, al Senado, repitiendo lo que ya conocen los señores senadores por el informe que ha hecho en la sesión de ayer el señor senador por la Capital; pero, si recuerdo ésto, es para demostrar que no hay antecedentes en que se haga esta

separación entre los obreros de la industria y los obreros del comercio.

Lo que ocurre con esta legislación, señor presidente, es que el legislador se resiste a dar fórmulas concretas para definir situaciones tan variadas y tan difíciles de comprender en una sola disposición legal.

Es por eso, que en la mayor parte de los países, la ley se limita a dar a los usos y costumbres la sanción legal.

El código en esos países es en realidad el reglamento que se dictan las empresas y aceptan los obreros; reglamento que varía naturalmente de empresa a empresa y en las distintas clases de negocios.

¿Cómo es posible pretender que en un artículo de un Código de Comercio se puedan prever tantas y tan variadas situaciones como las que se presentan en la industria y en el comercio, para no cometer la injusticia de proteger a unos trabajadores, sin comprender a otros que se encuentran en idénticas condiciones? En otros países, ni siquiera se establece en la ley. Son las convenciones colectivas las que lo establecen, las convenciones colectivas, que son en las épocas modernas, las que han de conducir a salvar todas las dificultades que se oponen a la legislación que tiende a armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo, porque si bien en esas organizaciones no se consulta la voluntad individual, en cambio se consulta la voluntad de agrupaciones, y siempre es preferible que sean los individuos mismos los que traten de sus propias relaciones y no el legislador que las somete a fórmulas rígidas, sin poder prever, porque es materialmente imposible, todas las variantes y las distintas situaciones que pueden presentarse en la industria y en el comercio, y no sólo en la misma industria y en el mismo comercio, sino en una casa o industria con relación a otra casa de comercio o a otra industria similar.

Los países industriales, como Alemania, Inglaterra, Francia e Italia, no han incurrido, por cierto, ni incurrirían nunca en el error de someter a la fórmula rígida de la ley la solución de estos problemas; en los que a primera vista parece afectado un trabajador de un empresario, pero que en realidad, en el fondo va involucrado un grave problema social. Esos países que han experimentado durante muchísimos años las consecuencias del grave problema, que han planteado los conflictos entre empleados y empleadores, saben

que no es la imposición del Estado; que no es el socialismo de Estado el que ha de resolver el problema. Es la acción de los individuos, pero no la acción individual aislada, porque es imposible que un obrero pueda tratar con su principal en igualdad de condiciones: la desigualdad económica no asegura el equilibrio debido; son las asociaciones, son los sindicatos, los que deben ser organizados por la ley, y es a esos sindicatos a los que se les impone la fórmula rígida, para asegurar las obligaciones que han aceptado por las convenciones.

Eso es, señor senador por la Capital, lo que ha determinado todo ese movimiento que nos ha informado en su brillante exposición. Si yo me propusiera una demostración práctica del error en que ha incurrido la Comisión, al incluir en sus previsiones a los obreros, yo preguntaría: ¿cómo arregla el mes de despido de un peón, que trabaja por día o por hora? ¿Cómo soluciona la dificultad del obrero que ha interrumpido su trabajo y tiene derecho a cobrar su remuneración durante tres meses, si solamente se ha contratado por día? Yo sé que se me puede contestar: en todas las industrias, en casi todas las fábricas, aunque a los peones, a los empleados se les pagan por día o por semana, están incorporados, realmente, a la empresa o industria de una manera permanente. Pero los contratos que celebra ese obrero son por el término que representa el salario que se le paga; cuando al peón se le paga por día, se obliga por día, por semana o por quincena. Y entonces, ¿cómo es que se les va a aplicar a los obreros el mismo criterio que se aplica a los empleados que se contratan por mes o por años y que desempeñan una función no aislada, diría yo, en una casa de comercio, sino una función de colaboración, que están incorporados, vinculados, a la misma empresa? Yo no concibo, señor presidente, cómo esta ley pudiera aplicarse para casos de esa naturaleza. Mas aún: yo creo que esta ley, lejos de favorecer a los obreros, los perjudica, y que si se extreman las previsiones, lejos de favorecer a los empleados de comercio, los perjudicará.

Yo estoy seguro, que la mera presentación del proyecto ya ha ocasionado graves daños a los obreros y a los empleados de comercio. Y se explica: ¿Con qué va a pagar el comerciante esas mayores erogaciones que le demanda esta ley?

Los comerciantes que cargan a «gastos gene-

rales» el sueldo o la retribución de sus empleados, tendrán que hacer con esta ley una cuenta especial que va a gravitar necesariamente, sobre esa cuenta de gastos generales. ¿De dónde van a sacar los fondos para cubrir esa cuenta? La va a pagar el empleado o el obrero, porque cuando se presente pidiendo un empleo que debe retribuirse con 100 pesos, el patrón le recibirá ofreciéndole un sueldo de ochenta pesos, y el empleado o el obrero que necesita trabajar, tendrá que aceptar.

Entonces, se explica, pues, que esta ley pueda ser perjudicial, en realidad, para los obreros. Y el error estriba en pretender incorporar a la ley instituciones extranjeras que tienen otras bases distintas. Allí donde tiene el sindicato que defiende a ese obrero cuando el patrón quiere aprovecharse de la situación, le impone al patrón que pague cien pesos, en lugar de ochenta pesos.

Pero, en este caso ¿quién le impone al patrón que pague más de la retribución que le corresponde, cuando por la ley está obligado a hacer una serie de gastos a que tendrá que hacer frente?

Yo he aceptado, señor presidente, en el despacho de la Comisión muchos otros principios, que, realmente, haciendo un poco de violencia se los puede aceptar; digo de violencia al derecho privado. Así ocurre, por ejemplo, con las siguientes previsiones: que cuando el comerciante ha transferido su casa de negocio a otro, el contrato, que por definición es un contrato que se funda en consideración a la persona, debe pasar sin embargo al adquirente. La doctrina y la jurisprudencia francesa han tratado de justificar esa cláusula estableciendo que en el contrato de empeño va implícita la cláusula de que el empleado se obliga respecto de las personas que adquieren el negocio, si su principal lo enajenase; y respecto del adquirente, se sobreentiende que al adquirir la casa de comercio, se hace cargo de todas las obligaciones, que pesaban sobre esa casa de negocios, respecto de los empleados.

La ley del año 1928 incorporó en Francia este principio por una transacción, porque era lo que ya estaba establecido en Alsacia y Lorena, por las costumbres, los usos, y las convenciones de las empresas. Entonces se dictó dicha ley y se estableció esa cláusula sumamente criticada por la doctrina.

Yo entiendo que se violentan un poco los principios, pero acepto que se pueda incorporar esa reforma a nuestra ley. En la discusión

en particular, señor presidente, pienso proponer algunas reformas a la misma y en esa oportunidad ampliaré las razones que tengo para ello.

## 8

## MOCION

**Sr. Serrey.** — Pido la palabra.

Para hacer una moción de orden, en el sentido de que se comuniquen las sanciones del Senado producidas en la reunión de ayer y en la de hoy, porque la primera terminó con un cuarto intermedio y es de temer que hoy ocurra lo mismo.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Habiendo asentimiento, así se hará.

## 9

**CONTINUA LA CONSIDERACION DE LA REFORMA DE LOS ARTICULOS 154 A 160 DEL CODIGO DE COMERCIO.**

**Sr. Arancibia Rodríguez.** — Pido la palabra.

En cumplimiento de la tarea que me ha encomendado la mayoría de la Comisión de Códigos, tengo forzosamente que distraer nuevamente la atención del Senado para hacerme cargo de las objeciones que se han formulado contra el despacho; para abreviar en todo lo posible esta réplica, necesito hacer rápidamente un resumen de sus fundamentos generales.

He sostenido, señor presidente, que el proyecto en revisión de la Cámara de Diputados, que acuerda una indemnización extraordinaria para toda clase de contratos y en toda suerte de despidos, es inconstitucional y atentatorio contra garantías fundamentales de la inviolabilidad de la propiedad privada. He agregado que aparte de ser inconstitucional, es también contrario a todo principio de derecho de legislación, no sólo en materia civil y comercial, sino especialmente en el campo del derecho obrero y que es precisamente por esta razón que no se encuentra semejante institución en ninguna de las leyes que he citado, de los países más adelantados sobre esta materia; que el proyecto en revisión, substituye el régimen contractual para nuestras leyes civiles y comerciales sin provecho alguno, para empeorarlo, confundiendo las dos clases de contratos que se diferencian en toda la legislación, con plazo

y sin plazo, y sometiéndolos por igual a las cláusulas de despido y a disposiciones que siempre los han diferenciado; y por último, he recalcado, lo que por otra parte acaba de confirmar plenamente con su impugnación el señor senador por Catamarca, que este proyecto constituye un gran paso, una nueva conquista de la legislación obrera, que no pudo obtenerse en épocas más propicias, cuando fué encarpetado en la Cámara de Diputados, donde existían mayorías unánimes que habían proyectado la reforma. Me refiero al despacho de la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados que fué subscrito por los representantes de todos los sectores en 1928.

El señor senador por la Capital, que ha impugnado con un discurso documentado e interesante el despacho de la mayoría dijo, acaso con un vago presentimiento, que no quería perder esta causa y en todo caso que no quería perderla con costas.

Siguiéndolo en el lenguaje curialesco me permitiría recordarle, que para no perder una causa y sobre todo para no ser condenado en costas, es indispensable ante todo negar de entrada, fundamentalmente, todo lo que atañe al problema central de la demanda a fin de que no aparezca en ningún momento abandonada la defensa en aquellos puntos substanciales del ataque.

La impugnación de representante de la minoría de la Comisión no ha dicho una palabra, no ha concretado un argumento, no ha subrayado siquiera con un gesto la impugnación de fondo, según él mismo la calificó, que se refería a la inconstitucionalidad de la ley que se trata de sancionar.

Yo he citado en apoyo de ese argumento, los artículos expesos de la Constitución que garantizan la inviolabilidad de la propiedad privada y dos fallos de la Suprema Corte de Justicia que consideran con toda precisión y detención ese punto, especialmente lo que se refiere a la retroactividad que se da a esta ley, porque como recordarán los señores senadores hay un artículo expeso que dice que irá a regir también para todo contrato y para toda clase de despido que se haya producido desde el 1º de Agosto de 1932.

He agregado, en apoyo de esta tesis comentarios de la legislación francesa y un fallo de su Corte de Casación, precisamente sobre el mismo caso en debate, en que se había querido aplicar la ley vigente en Francia, de Abril de 1928, a un contrato de despido que había caducado dos meses antes. No le ha interesado al

señor senador por la Capital este aspecto de la cuestión. Son escrúpulos vagos e imprecisos — empleo sus palabras, — producto de un criterio rígido y estático, que lo han hecho recordar la anécdota ya comentada hace un momento, del pasajero aquel que perdió el tren porque llegó tarde y se quedó protestando en la estación contra la empresa. Parafraseándolo, le replico al señor senador por la Capital, que el único tren en materia de reformas sociales en que podemos embarcarnos los senadores de la Nación, no para en ninguna estación cuando lo prohíbe la Constitución y que, por mi parte, yo no he de tomarlo en marcha a cien kilómetros por hora, cuando no esté plenamente convencido de la justicia y de la conveniencia de las medidas que se quieran adoptar.

Ha tratado, sí, el señor miembro informante de la minoría, de una cuestión que es, si bien importante, secundaria. Ha querido encontrar, a todo trance, alguna ley o algún antecedente que pudiera citar, como precedente de otras legislaciones, acerca de lo que yo he calificado como una innovación exclusiva del proyecto en revisión. Y, para conseguirlo, hizo un largo, detenido y laborioso examen de numerosas leyes extranjeras. Eran, a mi modo de ver, y según puede constatarse fácilmente, inadecuadas las citas a los efectos de la demostración que se proponía.

Así, por ejemplo, insistió sobre las leyes de Bolivia, de Perú y de Chile, para demostrar que esas legislaciones tienen el antecedente que el señor senador necesitaba encontrar, de las indemnizaciones extraordinarias para después de fenecido el contrato de despido. No es así, a mi juicio, señor presidente; y así resulta de la propia lectura de esas leyes que con toda lealtad hizo el señor senador íntegramente, en lo pertinente.

Las leyes de referencia legislan, especial y separadamente, sobre las dos clases de contrato, el de plazo determinado y el de indeterminada duración. Para la segunda clase de contratos, rigen las indemnizaciones que fijan esas leyes y que el señor senador ha citado con cifras precisas; pero, cuando el contrato es de plazo determinado, no hay ninguna indemnización y cualquiera de las partes puede darlo por acabado, como dice nuestro código en su artículo 157, en cualquier momento.

Lo mismo puede decirse de las otras citas de leyes que ha mencionado en su discurso. Todas se refieren especialmente al caso del despido dentro del contrato de trabajo.

Yo no he sostenido, ni puede haberse en-

tendido así, que esa indemnización sea una consecuencia inmediata a un efecto del contrato de empleo privado.

Todo lo contrario, he sostenido, que el Código de Comercio no tiene nada que hacer cuando las partes han concluido sus compromisos por el vencimiento del plazo establecido en el contrato o por el cumplimiento de la obligación legal de dar el preaviso de despido y demás condiciones estipuladas.

También la impugnación se ha referido a los usos y costumbres de algunas grandes compañías que dan a sus empleados, primas, gratificaciones e indemnizaciones a la salida del servicio. Lamento que en vez de cuatro o cinco, que son las que ha señalado el señor senador por la Capital, no sean miles las empresas que puedan señalarse en tan destacada y humanitaria situación con respecto a sus empleados. Es posible que ha de llegar el día en que los usos suavicen las injusticias y las desigualdades que yo soy el primero en haber denunciado con motivo de este asunto. Es también posible que se arbitren otros recursos que existen en muchas leyes que en seguida voy a relacionar, para restringir en todo lo que es posible, el despido sin subvertir fundamentalmente, la naturaleza del contrato de empleo.

Pero estos no son antecedentes que puedan imponer soluciones en una Comisión de códigos, en donde tenemos que atenernos a los conceptos constitucionales, a los antecedentes legislativos y a las doctrinas jurisprudenciales, que deben servir de fundamento a la legislación de fondo.

Antes de pasar a otra cuestión, quiero dejar constancia de cuáles son las únicas restricciones que las legislaciones imponen al despido, entre las cuales no figura, por cierto, una indemnización en dinero, como en el proyecto.

Dice Jean Desprez, en su libro *Le Délai Congé*:

En un gran número de países, los textos relativos al plazo de despido dejan a las partes una entera libertad para romper el contrato, desde el momento que se observan las reglas del preaviso. Estos son Brasil, China, Ecuador, Gran Bretaña, Grecia, Japón, Nicaragua, Países Bajos, Perú, Estados Malayos.

Las otras legislaciones, consagran el mismo principio en la mayor parte de sus textos; pero contienen ciertas disposiciones que llevan al ejercicio de este derecho trabas más o menos serias. Así, ellas indican numerosas hipótesis en las cuales el despido no puede darse porque la situación de la parte interesada o afectada por este despido se encuentra en tal situación que una ruptura, aun siendo regular en su forma, le causaría un perjuicio muy considerable, mujeres embarazadas, movilizadas, patrones obligados a reemplazar rápidamente a un doméstico cuyos servicios le son indispensables.

En general, inspirados en el pensamiento de protección al obrero, los textos hacen controlar el despido del obrero, bien por los organismos profesionales, los consejos de empresa, o bien por las autoridades administrativas, jurisdicciones especiales con poderes bastante variables.

Las tendencias protectoras se manifiestan todavía en otros terrenos. Así, vamos a encontrar textos, que con ocasión de una crisis económica pasajera, restringe la facultad de despido a los obreros de tal categoría; otros que permiten a los obreros dar libremente despido en todo caso, y por el contrario, no autoriza a los empleadores. En fin, señalaremos, además, todo un conjunto de medidas de guerra y de post-guerra tomadas en favor de los mutilados y en interés de los movilizados. — Desprez. Pág. 166.

El estudio de los obstáculos opuestos al ejercicio del derecho de despido revela en los diferentes legisladores tendencias casi exclusivamente protectoras; se trata en regla general de medidas de favor, a veces bastante exorbitantes, tomadas en interés del asalariado.

Las menos acentuadas dejan al empleador libre, de romper el contrato en las formas regulares, pero lo obligan a desembolsar una indemnización equivalente a ciertos gastos de viaje, adelantados por el asalariado, o destinados a ser soportados por él.

(Ley chilena 4.053, de 8 de Septiembre de 1924 y ley alemana, de 20 de Mayo de 1898).

Nosotros hemos demostrado que ellas se justifican bien.

Más características y más interesantes son las disposiciones que obstaculizan el despido, cuando están motivados por ciertas causas, aunque en tal materia deben encontrarse dificultades de prueba muy serias — ley federal suiza de 1914 — y más aun, aquellas que toman en consideración las circunstancias, la condición momentánea del asalariado.

Refiriéndose después al rol de colaboración que desempeñan algunos organismos que colaboran en la cuestión despido, como los consejos de empresa noruega, ley de 1920 y checoslovaca de 1921, y los consejos de conciliación en Alemania y Austria, y demostrando lo excesivo de sus atribuciones dice:

«¿No se arriesga de arruinar la disciplina necesaria a la marcha de la empresa, de sembrar hostilidades, asperezas recíprocas, dando al patrón la impresión que en adelante la dirección de su propia casa le escapa en parte?».

Cierto, estos son casos excepcionales. Hemos dicho, su creación tiene, sobre todo, en vista a satisfacer el amor propio de los centros obreros. No es menos cierto que es de inspiración demagógica.

Dándose cuenta, sin duda, el señor senador por la Capital, de la imposibilidad de encontrar antecedentes precisos y eficaces en leyes extranjeras ni en los proyectos argentinos que sirvan de precedente a esta medida excepcional de indemnización para toda clase de despido, dijo una cosa que es muy interesante y digna de considerar con detención. Dijo, que en los otros países no existe esta institución extraordinaria de indemnización, porque todos tienen el seguro social de paro.

Por de pronto, señor presidente, parece cosa rara que todos los países del mundo tengan legislación sobre seguro para el paro y no se les haya ocurrido esto que se nos proyecta ahora aquí en la República Argentina.

Desde luego, entra uno, aún sin ser perito en la materia, a sospechar que algunas causas serias deben existir cuando se ha ido a buscar en todas partes en la colocación y el seguro, los dos únicos remedios ensayados contra el paro involuntario, sin introducir esta clase de indemnización exclusivamente a cargo de los empleadores.

Pero la cuestión del seguro, no sólo viene a ser interesante por esta afirmación, sino porque es uno de los medios que se han proyectado en la Cámara de Diputados para quitarle la dureza y los inconvenientes evidentes a esta indemnización extraordinaria. Se quiso establecer, en primer término, como obligatoria, y después resultó sancionada, por un artículo que vamos a estudiar más adelante, facultativamente, autorizando a todo empleador para que se aliviara en parte de la obligación de esta carga proyectada, contratando con compañías de seguros el riesgo por despido, sin perjuicio, agrega el proyecto sancionado por Diputados, de que siempre queda el empleador obligado directamente con su empleado por la indemnización, si no resulta en virtud del contrato de seguro.

Yo he tenido oportunidad de destacar en mi anterior exposición la naturaleza insoluble y grave del problema del paro voluntario, que no está ni puede ser considerado en el Código de Comercio, ni mucho menos resuelto. El seguro contra la desocupación es la llave maestra de todo el sistema del seguro social. Dice Paul Pic:

«Con qué objeto organizar todo un sistema de seguro contra la enfermedad, la vejez, la invalidez, si el trabajador está incesantemente amenazado de verse privado por un paro de su ocupación voluntaria y de un salario regular, que sólo puede permitirle con un gran

sacrificio alimentar el seguro? Hay que decir que el problema de los seguros sociales no será plenamente resuelto hasta el día que tenga éxito el de garantizar al trabajador contra el riesgo de la desocupación, que es el enemigo que paraliza todos los esfuerzos hacia una condición mejor. ¿Pero es posible una tal clase de aseguramiento? Hasta hoy ningún Estado ha resuelto el problema, si bien muchos lo han intentado.

Con ser tan difícil, como se ve, el problema del seguro contra el paro, agudizado especialmente después de la guerra mundial en que todos los países tuvieron que retocar sus leyes, no hay otro procedimiento ensayado en ninguna nación que el seguro por paro, para evitar los inconvenientes que aquí queremos evitar, con una indemnización extraordinaria dentro del Código de Comercio, exclusivamente a cargo de los empleadores.

El concepto económico del seguro radica en que, como toda la colectividad, el Estado y todos los habitantes de una Nación se benefician con el trabajo y la producción, sobre ellos debe pesar la carga que el trabajo y la producción le imponen. Es uno de los fundamentos inconvencionales para repeler toda ley que elimine el concurso del Estado, del asalariado y del patrón en toda clase de asistencia social, especialmente en el seguro contra el paro, porque todos los demás riesgos del hombre son fisiológicos, en tanto que el de paro es notadamente económico, y la sociedad, la colectividad, es la culpable de que se produzca y de que se agrave.

¿Cómo se puede sostener, entonces, que para salvar estos riesgos haya que ir exclusiva y directamente al bolsillo del patrón?

Hay tratadistas, señor presidente, de gran autoridad en cuestiones de derecho obrero y social, que sostienen que sólo hay un riesgo en la vida del trabajador, el riesgo de perder el jornal, y que, por consiguiente, el seguro social sólo debe ir a proteger la propiedad del salario. Todas las desgracias que debe remediar el seguro social radican en la falta de trabajo, en la imposibilidad física o por dificultades económicas.

Los que sostienen la diversidad de riesgos reconocen que el paro que se produce siempre se agudiza por causas económicas, y ese es el riesgo característico de la vida del asalariado moderno. Todos los demás riesgos tienen orígenes y causas distintas. El paro es, pues, la cuestión social más grave de los tiempos modernos. No hay, como he dicho, otra institución semejante en el campo del derecho obrero, y observo que estoy en los dominios plenos de

la cuestión social, fuera ya de los preceptos de los códigos comunes.

La institución que es el seguro del paro es tan difícil de organizar y de garantizar, porque el riesgo depende en gran parte de la voluntad del individuo. Todos los otros riesgos del seguro social están fuera del alcance de su voluntad, la enfermedad, la muerte, pero en el paro, no; y muy a menudo, los grandes fracasos de las leyes que se dan para combatirlo radican precisamente en que es muy difícil distinguir el paro involuntario del paro voluntario o por haraganería; al buen obrero que no tiene trabajo porque no hay, del mal obrero que no lo consigue porque no lo merece.

La cotización del obrero y del empleado en el seguro social, especialmente en el del paro, es lo más correcto y lo más legítimo, y es lo que mantiene, según la opinión de un tratadista, la convicción y el sentimiento en el asalariado de que los socorros que se le facilitan son para él un derecho sacado de su trabajo y de su esfuerzo, y no una limosna.

González Posadas, del Instituto Nacional de Protección Social, de Madrid, trae los datos que publica el Boletín Internacional del Trabajo, de Ginebra, «L'assurance de chômage», 1928, y enumera todas las clases de seguro social por paro, que no voy a leer por no distraer demasiado la atención del Senado, en todas las legislaciones y en todas las formas que se han proyectado. Y solamente en Rusia, señor presidente, el seguro y la asistencia social, la pagan exclusivamente los patronos, bajo el régimen del soviét.

¿Es esto lo que queremos imitar nosotros? No lo creo, señor presidente. Sería lamentable que siquiera nos aproximáramos a ello.

El Honorable Senado me va a disculpar si yo, en defensa, no solamente del proyecto de la Comisión en mayoría, sino también de principios y de actitudes, que pueden discutirse en esta clase de asuntos, por la tradición política y social que yo tengo, debo insistir todavía más para demostrar que mi oposición radica exclusivamente en argumentos económicos, sociales y jurídicos, que yo considero justos; que no tengo ninguna preocupación que perturbe mi imparcialidad, ni me lleve a la defensa de ningún interés de clase. Y por eso quiero significar algo más, respecto a lo poco que yo sé y que me ha inducido a pensar en la forma en que lo estoy exponiendo ante el Honorable Senado.

Refiriéndome siempre al problema del empleado sin trabajo, que ha sido el fundamento

y objetivo que se ha dado a este proyecto, por más que el secreto parlamentario y el gran respeto que tengo por la culta e ilustrada opinión ajena, me impiden referirme a las expresiones particulares de cada uno de los diputados que han intervenido en este debate, para estudiar en conjunto únicamente, como lo he hecho, la sanción en mayoría de la Cámara de Diputados, resulta evidente que allí predominó el propósito que se confesó reiteradamente: esta no es una medida de indemnización pecuniaria; esta es una institución para asegurar la estabilidad del empleado: nosotros no queremos dinero para los asalariados; deseamos que los patronos no puedan despedirlos; el patrón, se agregó, no está obligado nunca a despedir a sus empleados. Por esto es necesario determinar, cómo y por qué es imposible, aparte de ser ilegal, llegar con esta reforma al artículo 157 del Código de Comercio a resolver esta grave situación del paro involuntario, estabilizando al empleado y quitarle al patrón el derecho de despedirlo cuando no lo necesita, cuando no le sirva o cuando no lo pueda pagar.

Inglaterra es la nación que ha conseguido, mediante la influencia decisiva de Lloyd George, llegar a la reglamentación mejor y más eficaz del régimen del seguro sobre el paro forzoso, que le cuesta innumerables millones de libras por año y que no le da, a pesar de eso, ni remotamente, los resultados que la ley tiene en vista.

El seguro contra el paro alcanza en Inglaterra a todos los comprendidos entre los 16 a 65 años que trabajan en Gran Bretaña en virtud de un contrato de servicios; no se exceptúan los aprendices que perciben alguna remuneración ni los marinos. Se excluyen los trabajadores agrícolas y forestales, el servicio doméstico, los empleados, los trabajadores que ingresan más de 250 libras al año, los que se dedican a la enseñanza, los que trabajan como comisionistas, los pescadores que van a la parte, los que son familiares del patrono, aquellos cuya remuneración se reduce a una participación en las ganancias. No se admiten al seguro los trabajadores de industrias de estación, ni a los que trabajan en industrias excluidas del seguro; tampoco se incluyen aquellos que viven en dependencias de otra persona ni a los que tienen renta o pensión anual que no depende de trabajo personal, mínima de 26 libras.

Los recursos para el seguro los proporcionan los obreros, los patronos y el Estado. Las cotizaciones varían según la edad y el sexo. El

tipo de cotización normal es por parte de los interesados, 6 peniques semanales los hombres y 4, las mujeres; 6 y 5 peniques, respectivamente, los patronos y 5 1/7 y 3 6/7, el Estado.

Francia tiene dos leyes recientes, la de 1928 y la de 1930 sobre seguro obligatorio para toda clase de riesgo, pero ha eliminado, después de un gran debate, el proyecto de seguro al paro, por miedo al fracaso y al enorme costo que representa. Apenas se consiguió introducir en la ley francesa de 1930 un seguro condicional y temporal para el paro o desocupación involuntaria a todo obrero que, estando en las condiciones del seguro general, pagase el doble de su indemnización y tan sólo por cuatro meses.

En Austria, los recursos para el seguro del paro los adelanta el Estado; al final de cada ejercicio se saca la cuenta de lo gastado y se reparte por terceras partes entre el Estado, los patronos y los trabajadores. Así, pues, los patronos y los asalariados tienen que reembolsar al Estado las cantidades adelantadas.

En Bélgica, para tener derecho a percibir el auxilio contra el paro es necesario estar inscripto en la caja durante un año cuando menos, hallarse al corriente en la cotización y llevar tres días parados; no tienen derecho al auxilio los asegurados en estado de incapacidad para el trabajo, los parados por huelga o lock out, los que rehúsen empleo para el que sean aptos y sea además ofrecido dentro de las condiciones habituales en la región. Las indemnizaciones de paro, incluidas las subvenciones de los poderes públicos, no pueden rebasar en ningún caso, los tres cuartos diarios.

En Suiza, el seguro contra el paro se rige por la ley federal del 17 de Octubre de 1924 sobre concesión de auxilio, según antes se ha dicho. Es un régimen de seguro voluntario. Concede indemnizaciones a las cajas de paro públicas y privadas que descansan sobre el principio del seguro. Los órganos encargados de administrar el seguro son las cajas; las cajas deben excluir todo fin lucrativo o extraño al paro; llevar contabilidad independiente y ofrecer garantía de buena gestión de los fondos; establecer reglas precisas sobre las prestaciones; los miembros que compongan cada caja no pueden formar parte de otra. Las prestaciones en metálico de la caja no deben pasar del 60 % de la pérdida de ingreso normal del parado. No tiene derecho a indemnización más que los parados involuntarios inscriptos en servicio público de colocación y que no han encontrado empleo conveniente o adecuado. El último patrono con quien trabajó el

parado debe certificar la causa de la desocupación. No tienen derecho a indemnización los parados que no se han inscripto en una caja de paros y no llevan 190 días por lo menos cotizándose. No hay derecho a indemnización cuando el paro es consecuencia de un conflicto colectivo; tampoco hay derecho a indemnización cuando el parado está incapacitado para trabajar y mientras dura la incapacidad.

Podría continuar refiriendo la organización del seguro social en los demás países, pero es innecesario.

No hay otra manera ni otro procedimiento para combatir el paro que la contribución del obrero, del empleado y del Estado.

Tengo que decir muy pocas cosas más con referencia a las modificaciones del código en materia de despido, y a las restricciones que pueden imponerse.

El señor senador por la Capital, consideró ayer, de paso, un artículo del proyecto, que establece que el plazo determinado en un contrato debe ser hecho por escrito, en primer lugar, y después, que no se tendrá por existente ese plazo si resulta de los usos del lugar o de las condiciones en que ha sido convenido, que se ha puesto simplemente a objeto de burlar el despido.

Esta es una restricción, persiguiendo la Comisión el propósito de beneficiar en todo lo posible al empleado y al obrero, porque, por su naturaleza y por el uso corriente en el comercio, especialmente entre nosotros, el contrato de empleo nunca tiene plazo. Si se les ponen plazos a los contratos después de las restricciones y de las garantías que acuerda esta ley, en ciertos casos, puede ser evidente que se tiene únicamente en vista el propósito de no cumplir con el despido.

Esta es una disposición que existe en varias leyes y que remedia en parte los inconvenientes que evidentemente tiene la institución del despido, en cuanto siempre ha sido establecida para el contrato de duración indeterminada.

Así fué el proyecto de la Comisión de Legislación que se discutió en la Cámara en 1928. Cuando se le preguntó al miembro informante de la Comisión, diputado de Tomaso, si los beneficios y el aumento que se concedían en ese proyecto de un mes de sueldo por cada año de servicio, se refería únicamente al contrato de duración indeterminada, como lo establece el Código de Comercio, contestó categóricamente así: «Hemos conservado el pensamiento fundamental del artículo 157 expresado en su primer párrafo que se refiere a los contratos en

que no hay tiempo fijado para el empeño, cuando la cesación se produzca por decisión propia del patrón y sin que haya mala conducta del empleado. Muy probablemente, siguió diciendo, muchas casas de comercio, si el despacho se convierte en ley, adoptarán el sistema de hacer con los empleados contratos por tiempo fijo. Sería una consecuencia útil de la ley porque esos contratos darán al empleado una estabilidad conocida. El empleado sabrá de antemano la fecha en que su actividad cesará y podrá en tiempo tomar las medidas necesarias para precaverse».

Es inconveniente ir con la reforma a desviar esa práctica y esa situación ventajosa, a mi juicio, para el empleado. Este, con tiempo determinado tiene la reconvencción tácita de su contrato; no hay objeto ni conveniencia en hacerla expresa, imponiendo también el preaviso para el contrato con plazo como lo hace el proyecto en revisión.

El señor senador por Catamarca, creía con respecto a este punto, que ofrece un gran inconveniente la solución de todas estas cuestiones cuando el empleado o el obrero se pague por día. Yo no participo de los temores del señor senador en razón de la opinión de un profesor, que es un comentarista del Código de Comercio, el doctor Siburu, que se expresa así:

Se ha dicho que este artículo 155, sólo tiene aplicación cuando el ajuste entre principal y empleado es por mes y no por día, porque se considera cada día de trabajo como un contrato separado. Este distinguo de interpretación que es muy justo bajo ciertos aspectos, no tiene, sin embargo, ninguna base legal. Si cada día de trabajo es un contrato separado cuando el ajuste es por día, cada semana o quincena será un contrato separado cuando el ajuste es por semana o quincena y por la misma razón, cada mes será también un contrato separado si el ajuste es por mes. La liquidación diaria o semanal es una modalidad del contrato, como es la mensual y nada más.

Por eso yo había dicho en mi anterior informe que las modalidades o las diferentes maneras de ejecución de un contrato no modifican, no caracterizan ni diferencian su naturaleza jurídica.

Me queda por referirme ligeramente a las observaciones que ha formulado el señor senador por Catamarca, cuya autoridad me complace en reconocer, hoy más que nunca, porque a pesar de estar en disidencia con la Co

misión en realidad viene a darle la razón en muchas de las cosas que ha sostenido.

En primer lugar resulta que este proyecto es benéfico y liberal, y que va a remediar a un numeroso grupo de asalariados como son los obreros de comercio que no están amparados por ninguna legislación.

No es éste un error de la Comisión, ya lo advertí en la interrupción que me concedió. La circunstancia de que los demás obreros sujetos a la ley civil no tengan estas ventajas, no da pie para decir que sea malo dárselos a los obreros del comercio.

De manera que, remediaremos parcialmente la injusticia que aflige a los trabajadores asalariados en el orden comercial, lamentando no hacer lo propio con los obreros que trabajan en las otras industrias.

Por lo demás, me remito a los fundamentos que dí sobre este punto en mi informe anterior.

No acepto, y ya lo he dicho anteriormente, que con este despacho de la Comisión de Códigos se destruya su estructura ni se modifique fundamentalmente su régimen jurídico. En la forma que ha ordenado la Comisión la reforma proyectada, se amplía considerablemente el derecho de los trabajadores del comercio y se le ponen gran número de restricciones al despido, sin afectar la economía de la ley.

De manera que se ha llegado, a juicio de la mayoría de la Comisión, al máximo de las concesiones que lógica, jurídica y constitucionalmente, podíamos acordar. Y para concluir, reitero mis votos por que tengamos muy pronto a consideración del Congreso argentino leyes más amplias y más eficaces que nos permitan dar mayor igualdad y justicia a los trabajadores del país.

Nada más.

**Sr. Palacios.** — Pido la palabra.

Cuando observo que disposiciones tan simples, que contienen fundamentos tan justos como estas que discutimos, son criticadas en el recinto, por hombres que demuestran preparación y talento, como el señor senador, miembro informante, de cuya imparcialidad nadie ha dudado, y se invocan para ello los «principios inconcisos» del derecho, pienso que los códigos están muy atrasados.

Los códigos siempre están atrasados. Ellos son una concreción, mejor dicho, una cristalización de normas que corresponden a un momento dado de la vida de un pueblo. Es la vida social la que los crea. Pero la vida se trans-

forma permanentemente; es un fluir constante. Los códigos, en cambio, mantienen su estructura y sus principios como si fueran a regir siempre. Y así surgen los postulados inconcisos, respetables cuando apareció el código, cuyo origen es el de Napoleón, inspirado en el individualismo filosófico y el liberalismo económico, revolucionarios con Adam Smith al iniciarse la gran conmoción industrial de fines del siglo XVIII, pero que resultan inaceptables en esta época en que el principio de socialidad interviene por exigencias imposterables de la vida. Los códigos mantienen su estructura y sus principios como si hubieran de regir para siempre. Y eso significa poner valladares insalvables a la evolución de los pueblos.

«Inconcuso», señor presidente, y empleo la palabra pronunciada por el señor senador, quiere decir *firme, sin ninguna duda ni contradicción*, y yo sostengo que tales principios no existen.

Un sabio profesor austriaco, el rector de la Universidad de Viena, sostenía que el derecho privado, vigente, descansa en un concepto de la respectiva potencialidad de los diversos grupos sociales que no es real, pues, naturalmente, la potencialidad de los núcleos sociales ha cambiado.

El desarrollo de la industria, el desenvolvimiento del comercio y ciertas conquistas políticas han dado fuerza a los obreros y, por lo tanto, según Menger, deben tener derecho a que sus intereses vitales se respeten.

Yo considero que la tesis del profesor de la Universidad de Viena es incompleta, ya que éi se refiere solamente al poder. Hay, sin duda, un interés ético que tiene un valor jurídico absoluto y que los legisladores deben tomar en cuenta para la modificación de los preceptos legales.

Pero, de todas maneras, ya sea que reconozcamos el cambio de potencialidad a que se refiere Menger, ya sea que admitamos el interés ético, lo cierto es que todo ello transforma, constantemente, por el desenvolvimiento de la vida, esos principios «inconcisos» del derecho.

La ley no puede gozar del triste privilegio de la inmutabilidad, del hieratismo, en medio de la transformación total; mientras toda a su alrededor cambia, mientras nacen nuevas formas de producción, todas orientadas por la fuerza directriz que rige el proceso de la sociedad y que es la *justicia*.

La libertad de contratación se sigue sosteniendo como principio inconcuso y sus sostenedores han visto pasar impasibles más de un siglo de progreso.

El desenvolvimiento de la idea económica sin embargo, está sujeta a una gran ley, la misma que rige todas las manifestaciones de la vida y de la inteligencia. Es la ley de la curva de una parábola que describe todo lo que existe, en todos los órdenes de la vida, así lo infinitamente grande como lo infinitamente pequeño.

En la edad media, época antinómica, en que parece que la humanidad se detuviera para volver a comenzar su camino, la libertad económica se presenta ahogada bajo el peso de trabas infinitas, que impiden el desarrollo de la producción. El régimen de las corporaciones, con esa red inextricable de preceptos absurdos tendientes a mantener el monopolio, petrificaba las formas y los procedimientos en la industria. Después, desaparece la economía urbana debido a la formación de los grandes estados y surge la economía nacional. Los grandes descubrimientos geográficos, más tarde, habían de producir el ensanchamiento del mercado exterior, para que apareciera el mercado internacional. Se necesitaba una producción más grande, más barata. Entonces fué necesario suprimir las trabas.

Esta es la segunda fase de la parábola: guerra a las restricciones.

Primero los fisiócratas, después Adam Smith que enunció, defendiendo la libertad, un pensamiento eminentemente revolucionario.

Luego en la tercera fase, la libertad se hace liberticida: La máquina a vapor a doble efecto inventada por Watt, desarrolló enormemente las fuerzas productivas y entonces se explota a las mujeres y los niños en las fábricas donde habría de surgir el sentimiento solidario de los trabajadores.

Es la tercera fase de la parábola. Degenera la raza y es entonces que en la libre e individualista Inglaterra, se inician de nuevo las restricciones, con la primera ley del trabajo, en el año 1802.

Está así terminada la parábola.

Los principios inconcusos que registran las leyes escritas, siguen también la parábola marcada por la vida. A cada una de las fases señaladas corresponden principios nuevos.

Son las causas económicas y las causas espirituales las que, en una red inextricable, determinan todo el movimiento de los hombres y crean los principios «inconcusos».

«No hay indemnización sin falta», afirman los juristas cuando combaten el despacho de la minoría. Veamos. Quiero señalar que mucho

antes que se dictara la ley de accidentes del trabajo, el Código de Comercio establecía el riesgo personal en la parte relativa a derecho marítimo, libro 3, título 6, que legisla sobre la contrata y los sueldos de los oficiales y gente de mar:

Cualesquiera de los individuos de la tripulación que cayera enfermo en el curso del viaje, o que, ya sea en servicio del buque o en combate contra enemigos o piratas, fuese herido o mutilado, seguirá devengando el sueldo estipulado; será asistido por cuenta del buque, y, en caso de mutilación, indemnizado a arbitrio judicial, si hubiera contestación. Los gastos de asistencia y curación serán a cargo del buque y flete, si la enfermedad, herida o mutilación sucediere en servicio del buque. Si tuviese lugar combatiendo en defensa del buque los gastos de indemnización serán prorrateados entre el buque, flete y carga en forma de avería gruesa.

Así dice el artículo 1.010 del Código de Comercio.

Si a la salida del buque, el enfermo, herido o mutilado, no pudiese seguir viaje sin peligro, será continuada la asistencia y manutención hasta su término. El capitán antes de salir, está obligado a hacer frente a esos gastos, y a proveer a la manutención del enfermo o herido.

Es este el artículo 1.011.

El enfermo, herido o mutilado solo tiene derecho a los sueldos hasta que esté perfectamente restablecido, sino hasta el día que pueda estar de regreso en el puerto de la matrícula, recibiendo, además, una indemnización para los gastos de retorno.

He leído el artículo 1.012.

Es claro que estas disposiciones están determinadas por razones fundamentales de orden económico, que transformaron los principios «inconcusos» antes de dictada la ley de accidentes del trabajo. No obstante lo prescripto en el Código de Comercio cuando se trató en la Cámara de Diputados la ley del riesgo profesional se consideró a esta teoría como antijurídica, pues no se basaba en principios del derecho, sino en la ciencia económica.

Me explicaría la superstición de la ley en los magistrados que viven frecuentemente encerrados en sus gabinetes, ajenos al desenvolvimiento o a la transformación de la vida, y que hablan en nombre de la ley y la aplican constantemente. Pero no en los encargados de hacerla, en los que venimos de afuera con el propósito de concordar la ley con la vida.

¿Cómo podríamos admitir, dentro del concepto de que no hay indemnización sin falta, la indemnización otorgada en algunos países

por los patrones a las mujeres grávidas y puerpéreas que trabajan en sus fábricas?

Desconfío de los juristas. Se apegan demasiado a los textos y llegan a creer que el derecho es la ley. Nuestro gran Avellaneda, en un trabajo que se llama «El pavorde don Juan Salas», que aparece en sus *Escritos y discursos*, tomo I, página 259, se refiere a los juristas apegados a la letra, y dice:

Cuando Alberdi publicó su *Fragmento preliminar al estudio del derecho*, todo el foro argentino se sonrió irónicamente, y dijo: ¡Derecho! Si no hay aquí ninguna ley, ni un texto, ni un solo comentario. Y cuando el futuro autor de las *Bases* fué a visitar al sabio Vélez Sársfield, autor del Código Civil, éste lo llevó a su enorme biblioteca y le mostró unos grandes infolios, que estaban revestidos de un amarillento pergamino, diciéndole: «Vea, Alberdi, éste es Cujaccio, y se lo muestro para que no se sepa que usted lo ha citado sin conocerlo por las tapas.»

Era el encuentro del pensador formidable que escrutaba en el corazón de los pueblos americanos y el gran romanista.

Para el jurista Vélez Sársfield, el derecho estaba todo en la ley romana, y por eso, cuando se le habló un día en la Universidad de la libre navegación de los ríos, pretendió demostrar que la doctrina estaba incluida en el texto de *Las Institutas*, sobre la división de las cosas *agua profluens*.

Como todos los discípulos demasiado fieles, los de Vélez Sársfield exageran, pero exageran en sentido contrario al maestro. Vélez Sarsfield torturaba a veces el código para encontrar en él la vida. Los discípulos, en cambio, torturan la vida para mantener los principios «inconeusos del derecho», para que se mantenga intacta la estructura de los códigos. Pero Vélez Sarsfield no era solamente jurista.

Hace apenas unos minutos, el doctor Arancibia Rodríguez, cuya dedicación al estudio es notoria, se alarmaba y decía: «estas disposiciones son inconstitucionales porque vulneran el principio de la inviolabilidad de la propiedad».

¿Sostenía, acaso, el principio absoluto y exclusivo de la propiedad?

Vélez, como jurista, dejaba constancia del principio del derecho romano en el texto de la ley, pero en la nota del artículo 2508 del Código Civil, consignada estas palabras admi-

rables que los comentaristas no citan y que los legisladores olvidan: «Cuando establecemos que el dominio es exclusivo, es con la reserva de que no existe con este carácter, sino en los límites y bajo las condiciones determinadas por la ley, por una consideración esencial a la sociedad: el predominio para el mayor bien de todos y de cada uno, del interés general y colectivo sobre el interés individual.»

Martínez Paz, autor de trabajos jurídicos de mucha importancia, ex rector de la Universidad de Córdoba, en un libro que en alguna ocasión he comentado, dice que estas palabras de Vélez que acabo de citar «no son sino una reminiscencia inconciente de las doctrinas utilitarias de Bentham.»

No es así, señor presidente. No se trata de reminiscencias inconcientes de determinada doctrina; significan la revelación cíclica del conflicto producido en la inteligencia del codificador. El jurista adhería fielmente al precepto romano y mantenía el principio de la libertad individual exclusiva y absoluta, hasta el extremo de que al definir el dominio en el artículo 2506, no se refiere a «las condiciones determinadas por la ley» de que habla la nota y el artículo 537 del Código Francés.

Parece que hubiese querido, al proclamar el principio, que no apareciera ni la posibilidad de limitación o de restricción; pero en la nota señala el camino para el futuro y ya no aparece el romanista, sino el gran estadista en el que los legisladores debemos inspirarnos.

Como es lógico, voy a votar por el despacho de la minoría, que mantiene la sanción de la Cámara de Diputados.

La mayoría ha frustrado los propósitos de justicia social que inspiraron el proyecto.

La indemnización por despido sancionada por la Cámara de Diputados, con el voto de todos los sectores, por unanimidad, señor presidente, después de un interesante debate, era sin duda el punto básico de la reforma que estamos tratando.

Considero que la ley tendría una deleznable estructura si el Senado aceptara la tesis sostenida por el miembro informante, tan eloquentemente.

La circunstancia recordada por el señor senador por San Luis, de haber sido yo el iniciador de esta reforma en la Cámara de Diputados, en el año 1915, explica mi intervención en el debate.

Mi proyecto, presentado al comenzar el año 1915, efectivamente, carecía de algunas dispo-

siciones que hoy conceptúo indispensables y que ha combatido el señor miembro informante. Pero entonces, hace casi 20 años, nadie se había ocupado en el país de una reforma semejante, y el que empieza, harto hace con empezar.

Los propósitos perseguidos en mi proyecto eran de justicia tan evidente, que en el curso de los 20 años últimos, sin prescripciones legales han sido aceptados por la jurisprudencia de nuestros tribunales, y a su realización, quedarían, en realidad, reducidos los beneficios obtenidos por los empleados y los obreros de comercio, si la ley los concretara tal como lo propone la mayoría, olvidando que en estos últimos 20 años transcurridos, el incremento del comercio, el desenvolvimiento de las actividades económicas en el país, exigen una preocupación más reflexiva por la fuerza productora humana, sistemáticamente descuidada por los legisladores.

Sostuve, en 1915, que los beneficios otorgados por el artículo 157 a los dependientes y factores, debían ampliarse a todas las personas que prestaran servicios de alguna naturaleza en las casas de comercio de los principales, o en un establecimiento fabril o industrial, ya fuera que gozase de un sueldo mensual o que su trabajo se remunerara en forma de jornal, siendo en este último caso la indemnización igual al conjunto de jornales que le hubiese correspondido en el mes anterior de su salario.

Libraba así, no sólo al dependiente o factor sino a los obreros, de las contingencias inherentes a una salida imprevista de la casa donde prestaban servicios, salida que podía depender exclusivamente de la voluntad del patrón.

Estaban, están aún, excluidos por la ley, una gran parte del personal de esos establecimientos comerciales que no tratan directamente con el público, pero que contribuyen como obreros al progreso de aquéllos, lo que parece no haber tenido en cuenta el señor senador por Catamarca, al proponer que queden eliminados de la prescripción del despacho para adaptarlo, según él, a la estructura del Código de Comercio. Débil razón, sin duda, como ya lo demostraré.

Mi proyecto los amparaba. Sostuve, también, en 1915 otra cuestión fundamental, al prescribir que la renuncia total o parcial del derecho otorgado por el código y la exoneración correlativa del principal era nula y no podía ser invocada en juicio. Tal planteamiento obedecía al hecho de que el beneficio otorgado por la ley

al dependiente no se reputaba una disposición de orden público por considerarse que ella se refería exclusivamente al interés privado; y de ahí que pudiera renunciarse.

En la época que presenté mi proyecto, la jurisprudencia comercial uniformemente establecía que la renuncia era válida. En la totalidad de los casos, sin embargo, la renuncia no se produce por un acto espontáneo del factor o dependiente, sino que es exigida como una condición previa por el principal al tomar a su servicio a las personas que le son necesarias para el giro de sus negocios. En tales condiciones la renuncia que se obtenía no era el resultado de una libre manifestación de voluntad, obedecía a una extorsión, desapareciendo así el elemento fundamental para que las convenciones pudieran tener validez. El consentimiento aparecía viciado por una violencia. Para que la disposición del artículo 157 del Código de Comercio fuera en la práctica lo que había querido el legislador y lo que enseñaba la doctrina, propuse la reforma; se trataba de una ley de orden público.

En los 19 años transcurridos desde la presentación de mi proyecto, la jurisprudencia ha variado totalmente. Los jueces han resuelto que la renuncia de los beneficios otorgada por el artículo 157 es ilegal por ser hecha en contravención expresa de principios de orden público, de acuerdo con el artículo 21 del Código Civil.

Se han presentado casos muy interesantes ante los tribunales resueltos por jueces que establecieron el principio de orden público que la Cámara no se había animado todavía a sancionar a pesar de los proyectos que reiteradamente se le presentaron. Y es así cómo la jurisprudencia de los tribunales se adelantó a la legislación. En los cuerpos legislativos no merecía ninguna atención este asunto; en cambio, los jueces señalaban el camino con una visión digna de aplauso. Eran los precursores.

En el año 1920, el doctor Carlos Sánchez Viamonte según lo refiere en el prólogo de la segunda edición de mi libro *El Nuevo Derecho*, patrocinó a un empleado del Frigorífico Armour en un juicio, contra esa compañía por cobro de pesos, con motivo de la aplicación del artículo 157 del Código de Comercio. El demandante, para obtener su empleo, se había visto obligado a suscribir un documento redactado en estos términos: «Declaro aceptar cualquier resolución que la administración tome a mi respecto, sea la suspensión o separación del

puesto que me ha confiado, renunciando desde este momento a todo reclamo inclusive al mes de sueldo que determina el artículo 157 del Código de Comercio.»

Se sostuvo por el demandante que esta disposición por ser una cláusula del contrato de trabajo era de orden público, pues la cuestión jurídica involucra en este caso una cuestión social desde que los obreros o empleados despedidos sin causa y sin aviso previo si no tuvieran el amparo de la ley caerían en una situación angustiosa, y este criterio fué admitido por los magistrados.

El juez federal doctor Clodomiro Zavalía, el 16 de Julio de 1920, resolvió el litigio declarando que el contrato de trabajo, en el caso del artículo 157 del Código de Comercio es de orden público y por consecuencia las partes contratantes no pueden renunciarlo.

Posteriormente, en el año 1928, el juez doctor Amuchástegui, profesor de Derecho Comercial en la Universidad de La Plata, sostuvo la misma tesis en una sentencia de amplia difusión. Por ella la cláusula del documento por el cual el empleado acepta cualquier resolución que lo separe de su puesto, renunciando a los derechos que le acuerda el código, viola los fundamentos humanitarios del mismo. En los considerandos de la sentencia, que son breves, decía el doctor Amuchástegui:

Que en los momentos actuales en que se inicia una evolución nueva del derecho hecha pública en las impaciencias populares de todo orden y forma y en la labor de los hombres de pensamiento y de estudio, caracterizadas por el predominio del derecho económico, no puede sostenerse sin exponerse a errores de graves consecuencias que la contratación de servicios en el comercio y en la industria, afecte sólo el interés particular de los empleados o de los patrones, pues como lo enseña la experiencia dolorosa de los últimos tiempos, ello importa la cuestión social más grave del derecho moderno y todo aconseja la adopción de medidas de libertad humana para evitar peligros sociales interpretando y aplicando la ley con más humanidad. Que por lo tanto, hoy no puede razonablemente sostenerse que no afecta al orden público todo lo relativo a esa materia y por ende a la renuncia de los derechos acordados por las leyes.

La sociedad está interesada en que no se haga comercio del trabajo humano. Ya lo expresó el Papa León XIII en su célebre encíclica de *Rerum Novarum*, afirmando el principio de que el trabajo humano no es mercancía y que era necesario para asegurar el orden

social, es decir el orden público, tratar con más humanidad a los empleados y obreros acordándoles el *mínimum* de vida, como se ha hecho en nuestro país.

Es curioso que los jueces aparezcan como revolucionarios mientras los legisladores marchan a la zaga.

Como se ve, la interpretación de los magistrados ya no se ajusta al criterio individualista de los que siguen considerando que el artículo 157, sólo mira al interés individual de las partes contratantes, quienes pueden destruir sus efectos por no ser de orden público, ni haber una cláusula que prohíba la renuncia. Así, los beneficios que prescribía mi proyecto, descuidado por el Congreso y olvidado por los legisladores, se hicieron efectivos por la interpretación judicial. De manera que hoy el proyecto tal como fué presentado por el diputado socialista en 1915, no tendría razón de ser. La jurisprudencia uniforme de los tribunales ha consagrado sus disposiciones, debido a la desidia del Parlamento.

En 1928 la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados estudió los proyectos presentados por los doctores Guillot, González Iramain y Míguez, representantes de los tres sectores, reformando no solamente el artículo 157 del código sino las prescripciones consagradas por los artículos 155 y 156, como lo ha recordado el señor senador por San Luis

El 6 de Septiembre de 1928 esa Comisión expidió su dictamen firmado por los doctores Giuffra, Calvento, Gómez, de Tomaso y Talens.

Se sostiene en él que:

Los accidentes imprevistos o inculpables, y las enfermedades profesionales de los empleados y obreros no interrumpen la adquisición del salario por el término de tres meses. Además, será a cargo del principal la indemnización del daño que aconteciere a los empleados u obreros en el servicio.

Por lo que respecta al artículo 157, además de lo que yo propuse en 1915, se sostuvo en el dictamen que para los factores, dependientes, empleados y obreros, a sueldo o jornal, con más de un año de antigüedad, la indemnización, en caso de despido, sería de un mes de sueldo por cada año de servicio. Se consideraba que el simple pago de un mes de indemnización a los empleados u obreros jóvenes o relativamente jóvenes

res, que hubieran trabajado durante un corto tiempo, podía ser una indemnización aceptable, pero no, tratándose de los que han gustado su actividad durante diez, quince, veinte, y hasta treinta años al servicio de un comerciante, porque en estos casos — decía la Comisión — la brusca cesación del contrato ocasiona perjuicios graves, a veces irremediabiles, a los empleados u obreros, y a las familias que ellos sostienen.

La Comisión sancionaba una protección más amplia que la prescripta en los proyectos anteriores, y así declaraba que en caso de cesación del contrato por voluntad exclusiva del empleador, la reparación pecuniaria que tuvieran los obreros o empleados, debía ponerlos durante cierto tiempo a cubierto de las necesidades apremiantes, permitiéndoles buscar tranquilamente la oportunidad de continuar sus actividades al servicio de otro comerciante.

El despacho de la Comisión no fue sancionado, pero las observaciones formuladas en el debate fueron recojidas por un diputado eficaz e inteligente, el doctor Adolfo Dickmann, que concretó las aspiraciones generales en un nuevo proyecto que la Cámara de Diputados consideró y aceptó por unanimidad, con algunas modificaciones.

La Comisión del Senado reforma desfavorablemente el proyecto venido en revisión. Suprime, en primer término, la indemnización por despido, que era, sin duda, lo fundamental de la iniciativa.

El proyecto originario había sido criticado en distintas ocasiones, porque se entendía que las cargas eran excesivas e imprevistas y podrían determinar muchas cesantías de servidores antiguos, en vísperas de la sanción de la ley.

Se criticó, también, el efecto retroactivo a que se ha referido el señor miembro informante, sosteniendo que por esa circunstancia era inconstitucional el proyecto.

No es inconstitucional, sin duda, porque el principio de la irretroactividad está sancionado, no por la Constitución, sino por el artículo 3º del Código Civil, y aun cuando el señor senador cree que se ha atacado la inviolabilidad de la propiedad. Se habló del efecto retroactivo y se dijo: una vez en vigor este sistema, sabremos que cada empleado no gana 12 sino 13 meses de sueldo; no lo sabíamos hace 10, 20 y 30 años y no estamos preparados para satisfacer las indemnizaciones que vendría a imponer la nueva ley.

Los diarios más importantes del país recogieron estas observaciones, algunas de las cuales les parecieron aceptables, pero siguieron las vicisitudes del despacho y su modificación en la Cámara de Diputados. Allí el proyecto sufrió transformaciones; se empleó un criterio cauteloso, mesurado, de suma prudencia, para evitar que las críticas pudieran tener una base seria. La indemnización, señores senadores, se redujo a medio mes de sueldo por año de servicio, siendo su máximo de 500 pesos. Se dispuso que sólo se contaría hasta cinco años la antigüedad anterior a la sanción de la ley, estableciéndose, por último, que los empleados podrían substituir las obligaciones impuestas, en el nuevo régimen, por un seguro a favor de los empleados que ocupen, sin afectar las acciones directas de éstos contra sus principales, en compañías o asociaciones mutuas autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional para esta clase de operaciones.

Una vez que el proyecto fué sancionado por unanimidad, porque todas las opiniones coincidieron con esta cautelosa medida que reducía al mínimo los beneficios otorgados a los empleados y a los obreros, «La Prensa», a quien nadie puede calificar de demagógica, hizo el elogio de la sanción de la Cámara de Diputados, expresando que conciliaba la necesidad de amparar a los empleados de comercio en su vejez o invalidez y contra la arbitrariedad, de todos los tiempos, con las posibilidades de sus principales. Consideraba, al mismo tiempo, que no es justo obligar a éstos a constituir un capital para cada uno de sus empleados, pero que tampoco lo era que esos hombres que han servido muchos años a una firma mercantil y generalmente contribuido a su prosperidad fueran despedidos sin ninguna indemnización cuando la edad los vuelve menos eficientes.

«La Prensa» ataca, ahora, acerbamente el despacho de la mayoría de la Cámara de Senadores, y hasta emplea algunos términos que no son usuales en sus editoriales. Dice que sanciona disposiciones reducidas a proporciones irrisorias.

Yo pregunto a los señores senadores si puede magnificarse esta cuestión, si puede hablarse de principios fundamentales, del derecho, del peligro de la cuestión social, frente a una indemnización mezquina que otorga la unanimidad de la Cámara de Diputados y que no obstante eso, el despacho de la Comisión de Códigos, mutila con disposiciones que un gran

diario conservador de la Capital considera de proporciones irrisorias.

El 12 de Septiembre, «La Prensa» dijo:

Desgraciadamente, el proyecto ha sido reducido en la Comisión de Códigos a proporciones irrisorias. En el despacho de la mayoría de la misma, se conserva toda su armazón pero se suprime la indemnización por despido, estableciéndose sólo que cuando no haya preaviso se pagará un mes de sueldo al empleado que cuente de 3 meses a 5 años de antigüedad; dos meses de sueldo, si la antigüedad es de 5 a 10 años de servicios y a tres meses para el que tenga más de 10 años. El despacho de la minoría es igual a la sanción de la Cámara de Diputados.

En nuestro país los empleados y obreros se dividen en dos categorías, de las cuales una es privilegiada y la otra no. Constituyen la primera, los que prestan servicios a los gobiernos, municipalidades, de alguna importancia, empresas ferroviarias, tranviarias, telefónicas, de alumbrado y a los bancos. Estos gozan de un retiro a los 25 ó 30 años de servicios y tienen algunos, como los ferroviarios, garantías relativas de estabilidad y mejoramiento progresivo. Los de la segunda categoría, no tienen seguridad de ninguna clase y están a merced de sus empleadores. La bondad y rectitud de éstos no son suficiente garantía para sus servidores, porque esas bellas prendas personales no suelen llegar a inspirar la previsión en beneficio de los subordinados. «El comerciante mejor intencionado deja frecuentemente en la calle a sus viejos empleados». Por todas estas razones, el proyecto de amparo a los empleados de comercio, tal como lo aprobó la Cámara de Diputados, vendría a satisfacer una verdadera necesidad social, pero lo que ha propuesto la mayoría de la Comisión de Códigos del Senado, parece de importancia para los fines de justicia y equidad antes expuestos y deja a ese gremio tan meritorio y tan «importante en el desamparo actual».

El señor miembro informante, en el curso de su interesante disertación anterior y ahora, al contestar al señor senador por Catamarca, ha vuelto a insistir sobre los «principios inconcusos del derecho», sobre el régimen jurídico en materia contractual, sobre los principios en materia de contratos que rigen en nuestro país y es claro que sea necesario referirse a ellos, porque a mi juicio constituye la cuestión más seria, la cuestión fundamental en debate.

El señor miembro informante admite la indemnización por falta de preaviso, no por la cesación brusca y unilateral del contrato de locación de servicios. Como él, algunos diputados, y fuera de la Cámara algunos abogados, han sostenido que es peligroso introducir el concepto de la indemnización para un hecho que no implica culpa de parte del individuo que ha de pagar. Si el contrato se ha cumplido, si no se ha violado el régimen contractual establecido por el código, resulta, según ellos, absurdo, establecer una indemnización.

Con este criterio, los juristas apegados a la

tradicción romana, tienen forzosamente que considerar la teoría del riesgo profesional, incorporada ya a la legislación universal y a nuestras leyes, como antijurídica. Para ellos carecería de base en el derecho, pues procedería de las ciencias económicas olvidando que el derecho ha sido modificado en gran parte por la transformación de la base económica. Cuando se produce una conmoción en la estructura de la sociedad, aparece una crisis del derecho. Este es un fenómeno observado en todas las épocas de la historia, y que no deberán desconocer los juristas.

Nuestro Código Civil, antes de la sanción de la ley de accidentes del trabajo, estaba en la primera etapa de la evolución de la doctrina, en lo que se refiere a la responsabilidad por daños y perjuicios. El código establecía en el artículo 907, que:

Quando por hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su persona o bienes, sólo se responderá con la indemnización correspondiente si con el daño se enriquece el autor del hecho, y en tanto en cuanto se se hubiera enriquecido.

Y el artículo 1.109, sancionaba:

Todo el que ejecute un hecho que por su culpa o negligencia, ocasione un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil.

Como se ve, la responsabilidad de indemnizar el daño, sólo procede, de acuerdo con los «principios inconcusos del derecho», cuando existe dolo, culpa o negligencia en el que lo ocasiona, o cuando éste se enriquece.

Tal era, señor presidente, el principio romano de la culpa delictual, de la cual surgen lógicamente los conceptos de la igualdad abstracta y de la propiedad absoluta, tan gratos a los juristas que siguen sosteniendo los principios tradicionales.

Pero el desarrollo industrial, la maquinaria, las actividades del comercio, exigieron la transformación de la ley civil, para que apareciera en concordancia con las necesidades del ambiente y de la época.

El señor miembro informante de la minoría, en la primera sesión, dió lectura a algunas páginas del mensaje del general Roca y su ministro Joaquín González, enviando al Congreso el proyecto de ley nacional del trabajo. En ese mensaje se sostenía, de una manera clara, cómo el Código Civil ya no respondía a las necesidades del ambiente argentino, y cómo era nece-

sario transformar la ley para ponerla en concordancia con la vida.

Joaquín González, aquel estadista, que en 1904 ya tenía la visión clara de nuestro porvenir y de las necesidades que había que satisfacer, decía: «Nuestro código presenta en diversas partes de su inmensa fábrica, secciones muertas, paralizadas y como abandonadas por su insuficiencia o falta de adaptación a la vida contemporánea».

Y hubo jueces, señor presidente, para quienes yo reivindico en la República Argentina el honor de haber iniciado la gran transformación que no éramos capaces de producir los legisladores; hubo jueces, que admitían la teoría que sostengo en este debate, mucho antes de sancionada la ley de accidentes del trabajo.

El doctor Ernesto Quesada, juez civil en los autos «Oliveira contra Madeira y Attaché», de Mayo 10 de 1905, sostuvo:

1º Que no es exacto que la acción por daños y perjuicios emergentes de los hechos por accidentes del trabajo, proceden únicamente cuando se prueba que en el hecho hubo culpa o negligencia imputable al patrono.

Lo que funda la acción es el daño sufrido sin razón, cualesquiera sean las causas, por buena que sea la maquinaria empleada y por manifiesta que resulte la vigilancia de patronos y capataces.

2º Que no incumbe al obrero la obligación de probar la culpa, sino que tal prueba ha invertido los términos y corresponde al patrono.

Esta sentencia era ilegal, pues contrariaba al Código Civil, que se hallaba en la primera etapa de la evolución de la doctrina, sancionando la culpa delictual.

Continúo leyendo:

Esto sentado, en las responsabilidades subsidiarias por accidentes del trabajo, no hay por qué ni para qué atender a la responsabilidad o intención del agente inmediato del hecho. Se atiende tan sólo al hecho que causa el daño, pues el patrono responde de los hechos de la industria, sean ellos producidos por obreros, por las cosas que forman parte de la industria o intervienen en ella, sea por vicio propio o riesgo de la cosa; sean hechos de la naturaleza o que resulten de la industria misma, siempre que el daño ocurrido al obrero o dependiente no hubiera sido sino por su culpa o voluntad.

Los estadistas señalan el siguiente porcentaje en las causas productoras de los accidentes del trabajo. Hechos desconocidos, causas fortuitas y de fuerza mayor, 68 %; culpa del obrero, 20 %; culpa del patrono, 12 %.

Estudiando estas causas, el doctor Williman, que fué rector de la Universidad de Montevideo, antes de ser presidente de la República del Uruguay, formuló consideraciones muy interesantes, que deseo hacer conocer al Honorable Senado, porque vienen de un mandatario de un país sudamericano y porque además, las enunciaba en un pueblo donde el industrialismo era incipiente y donde por lo tanto no se había producido de una manera imperiosa la exigencia de la modificación de la doctrina. Por otra parte allí la legislación es igual a la nuestra.

El doctor Williman decía:

Llegamos a la conclusión de que, según la teoría del derecho común, sólo doce veces sobre cien accidentes, el obrero estará en condiciones de reclamar una indemnización. Pero si a esto se agrega que es al obrero a quien corresponde la prueba de la culpabilidad del patrón, y si se piensa en las dificultades casi siempre invencibles que se oponen a la exteriorización de la prueba, se comprenderá que las garantías ofrecidas por el derecho común, son casi completamente ilusorias, y que, según la frase expresiva de Tarbaurich, el operario en estas condiciones es una víctima de lo que podría llamarse la fatalidad industrial, en amigable consorcio con una injusticia social.

Estas palabras están consignadas en el mensaje del Poder Ejecutivo enviado a la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley de accidentes del trabajo en Junio 4 de 1903.

—Ocupa la Presidencia el vicepresidente provisorio del Honorable Senado, doctor Rudecindo S. Campos.

El concepto jurídico en materia de responsabilidad ya no es el del código de Vélez Sársfield, en ninguna parte del mundo, ni en nuestro propio país.

¿Cómo creer, señores senadores, en la inmutabilidad de la ley escrita?

El sistema de la culpa delictual fué primero reemplazado por el sistema de la responsabilidad contractual, con una presunción *juris tantum* en contra del patrón.

El empresario, el industrial, según esta teoría, *no debe solamente al obrero su salario, le debe también su seguridad*; subraye las palabras.

Es claro que todo esto está en contra de la estructura del Código Civil, en contra de los principios del monumento legislativo del sabio cordobés.

Los grandes jurisconsultos, entre ellos Sainctelette, especialmente, dieron la fórmula

El contrato establece entre las partes derechos y obligaciones recíprocas: el obrero da su trabajo y debe devolver la materia que le fué entregada para su elaboración; el patrón debe pagar el salario establecido y debe velar por la seguridad del obrero, debe conservarlo sano y salvo, durante la ejecución del trabajo que le confía y debe aún restituirlo válido y apto como lo ha recibido.

Por la teoría de la inversión de la prueba, la responsabilidad no surge del *cuasi delito*, sino del contrato de locación de servicios. No es ya el empleado u obrero quien debe probar la falta del patrón; al contrario, se presume siempre la falta del patrón y para ello se ha producido una modificación total en los principios del derecho. Se presume, señor presidente, la *falta del patrón*. Subrayo otra vez.

Pero esto no bastó. La inversión de la prueba considerada como antijurídica, por los que se aferran a los principios del código, no pudo evitar el número enorme de pleitos que hacían inútil el derecho de los obreros.

Se seguía, todavía, en el dominio de la culpa, del que yo desearía ver salir al señor miembro informante.

No era, es claro, la culpa *aquiliana*, la culpa del derecho romano, pero era todavía la culpa *contractual*. Fué menester abandonar para siempre las teorías subjetivas de la responsabilidad para reemplazarlas por la teoría objetiva que aportara un concepto de equidad, de justicia indispensable.

De ahí la teoría de la responsabilidad legal, que fué explicada un año antes de la sanción de la ley francesa del año 1878, por Saleilles y Jossierand, el primero en su libro *Accidentes del trabajo y responsabilidad civil*, y el segundo en su tratado sobre *La responsabilidad*.

Y esta teoría objetiva trajo fácilmente la teoría del *riesgo profesional*, que es la que hoy se acepta en todos los países civilizados y que está incorporada ya a nuestra legislación civil. Y así el desarrollo de la industria y del comercio, de acuerdo a la idea directriz de la sociedad, que es la justicia, transformó el concepto jurídico simplista de la culpa. La industria y el

comercio crean nuevas relaciones entre patrones y obreros con su enorme complejidad actual y esas relaciones deben ser reguladas por la ley. Esta debe seguir el ritmo de la sociedad; la ley debe ajustarse a las necesidades del ambiente y sino la ley queda anquilosada, cristalizada y no responde ya a las necesidades colectivas, ni satisface los anhelos de un pueblo.

Sachet sostiene que los gastos pecuniarios resultantes de los accidentes corporales — y esto puede aplicarse perfectamente a la indemnización por despido — son uno de los elementos del pasivo periódico, como la reparación de la máquina, la remuneración del trabajo, y de la dirección, la amortización, etc. En una palabra, como fundamento del derecho a la indemnización, se ha substituído la falta del patrón, cuya prueba incumbía a la víctima, por la relación de causa a efecto entre el accidente y el ejercicio del trabajo, independientemente de todo hecho subjetivo. En virtud de la teoría del riesgo profesional desaparece así, en realidad, el concepto de *responsabilidad*, aun cuando se sigue usando la palabra en la ley. El concepto o el término que reemplaza a la «responsabilidad», debe ser la «garantía».

¿Y qué queda de los «principios inconcusos del derecho»?

Se ha invocado también por el señor miembro informante de la mayoría, la libre contratación para combatir la sanción de la Cámara de Diputados. La libre contratación, era la expresión clara y precisa que correspondía a un estado económico, cuando aparecieron los códigos civiles; el liberalismo económico era la doctrina que lo informaba. Había que romper todas las trabas, impedir todas las restricciones. La libertad de contratación admitía la igualdad de las partes contratantes, pero, después de la complejidad enorme de la vida industrial con la culminación del régimen capitalista industrial que se desenvuelve en un período ulterior a la Revolución Francesa, pues ésta correspondió al período de la manufactura, — ¿cómo es posible admitir la igualdad de las partes contratantes sin la cual es odiosa la «libre» contratación?

El artículo 1.197 del Código Civil establece que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Si este precepto se considera de una manera absoluta, habrá que repudiar toda la legislación obrera que significa para los individualistas una intervención del Estado perjudicial en el desarrollo de los fenómenos económicos.

Los juristas, han llegado a la exageración en nuestro país, respecto a este asunto de la libertad de contratar. Han sido los profesores de derecho los más reaccionarios. Un decano de la Facultad de Buenos Aires, llegó a decir, un siglo después que la exageración de ese concepto había sido repudiada en Inglaterra, que la libertad de contratar es inalienable.

Nadie puede impedir a un patrón que contrate con un empleado dispuesto por su espontánea voluntad a trabajar 12 horas. El establecimiento de la jornada, depende de la voluntad del obrero y el patrón, quienes deben convenir y discutir las condiciones del trabajo.

Un obrero puede trabajar si lo cree conveniente, de acuerdo con esa teoría, 14 ó 16 horas, porque es libre. En nombre de la libertad se puede llegar así a sostener, que por la libre voluntad de los contratantes está permitido enajenar la propia libertad. Esto sería lo que he llamado, libertad liberticida.

Contrata el débil y el fuerte. De ahí la legislación tuitiva de la clase trabajadora. No basta establecer, teóricamente, la igualdad de derecho entre las partes contratantes cuando existe la desigualdad de hecho.

Debe reemplazarse el individualismo abstracto e inorgánico con un individualismo que se vincule orgánicamente al fin social de Estado, armonizando así la moral individualista con la social y transformando los códigos que son hoy de puro derecho privado, en códigos de derecho privado social.

Esto está perfectamente de acuerdo con mis ideales socialistas que proclaman la libre expansión de la personalidad humana y la ampliación y el ennoblecimiento del individualismo.

Creo, por otra parte, que si la conciencia colectiva nace de los hombres ella será mejor cuando más elevado sea el valor moral del individuo. Por eso amo la libertad, pero vinculándola a la socialidad sin la cual se llega a los extremos que pretenden hacer perdurar los legistas aferrados a los principios inconcusos del derecho.

Hace más de un siglo, señor presidente, que un representante de la Cámara de los Comunes aducía la misma argumentación que el decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires a que me he referido, en la individualista Inglaterra, con motivo de un proyecto de jus-

ticia social. Decía que se trataba de materias sobre las cuales no debe legislarse, que se arreglan por sí mismas mejor de lo que puede hacer gobierno alguno.

El Poder Legislativo — agregaba — no debe interponerse entre capitalistas y obreros que contratan libremente y que por lo tanto son dueños de hacer lo que les convenga.

Lord Macaulay calificó estas afirmaciones de monstruosas y dijo que contra ellas se rebelaría el propio Adán Smith.

Para refutar a su adversario, cita el proyecto del conde de Lincoln, sobre reglamentación higiénica de las viviendas, presentado a la Cámara de los Comunes con anuencia del gabinete y supone que algún propietario de Manchester atacara ese proyecto con los mismos argumentos con que se combatía el que se refiere a la limitación de la jornada. El propietario hablaría así, dirigiéndose al conde de Lincoln:

A su señoría no le gustan las casas que carecen de desagüe. Cree su señoría, que mis alcobas son sucias; nadie le obliga a dormir en ellas; use su señoría de su libertad, pero no restrinja la de sus vecinos. Yo puedo hallar muchas familias que paguen gustosamente un chelín mensual por que les deje vivir en lo que su señoría llama un cobertizo propio para bestias. ¿Y por qué no he de cobrar yo el chelín que quieren darme voluntariamente? ¿Y por qué no han de tener ellas el abrigo que yo les proporcione por un chelín? ¿Por qué envía su señoría, sin mi permiso, a un hombre para que blanquee mi casa, obligándome así a pagar lo que yo no he mandado hacer? Mis inquilinos juzgan que la casa está bastante limpia para ellos o sino no hubieran sido inquilinos míos, y si ellos y yo estamos satisfechos, ¿por qué se mete su señoría entre nosotros, hollando directamente todos los principios del libre cambio?

Estos razonamientos son exactamente los mismos del diputado por Sheffield.

Si el conde de Lincoln, — dijo lord Macaulay en la Cámara de los Comunes —, me permite que yo lo defienda, contestaré a la objeción de este modo: Yo profeso la sana doctrina del libre cambio, pero vuestra doctrina es una exageración, una caricatura de la sana doctrina. Nada tendríamos que ver con los contratos celebrados entre su señoría y sus inquilinos, si estos contratos afectaran sólo a intereses pecuniarios; pero algo más que intereses pecuniarios está en juego.

Conciérne a la comunidad que no viva la mayoría de la gente, de un modo que hace la vida miserable y bre-

ve, que debilita el cuerpo y corrompe la inteligencia. Si por vivir en casas que parecen zahuirdas contrae gran número de ciudadanos gustos groseros; si se han familiarizado tanto con la suciedad, la hediondez y el contagio, que se esconden sin repugnancia en agujeros que revolverían el estómago a un hombre limpio por costumbre, esto será una prueba más de que hemos descuidado nuestros deberes, y una razón más para que ahora los cumplamos. Cuando está afectada la salud del pueblo el Estado debe intervenir en los contratos de los individuos.

Tal es la conclusión de lord Macaulay, expresada de este modo:

Si no limitáis la jornada, sancionaréis el trabajo intenso que empieza demasiado pronto en la vida, que continúa por luengos días, que impide el crecimiento del cuerpo, el desarrollo del espíritu, sin dejar tiempo para ejercicios saludables y para la cultura intelectual, y debilitaréis todas estas cualidades elevadas que han hecho grande a nuestro país. Nuestros jóvenes sobrecargados de trabajo, se convertirán en una raza de hombres débiles e innobles, padres de una prole aún más débil e innoble y no tardará mucho el momento en que la degeneración del trabajador afectará desastrosamente a los intereses mismos a que fueron sacrificadas sus energías físicas y morales.

Una raza de hombres débiles e innobles tendremos también entre nosotros si no velamos por la salud de los argentinos. Ya en una sesión anterior he tenido oportunidad de referirme a las estadísticas del doctor Escudero que no nos presentan, en el concierto de los pueblos civilizados, con grandes preocupaciones por la vida y la salud de sus hijos.

Pero es que aun dentro del mismo código, la libertad de contratación no tiene el carácter absoluto que se le atribuye. El artículo 1.197, da el principio general; pero el artículo 21, dice que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres. Y el artículo 5º expresa que ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público.

La sanción de la Cámara de Diputados, en el proyecto que discutimos, artículo 3º, establece: las disposiciones de esta ley se declaran de orden público.

No era necesario decirlo.

Sin duda hay una dificultad muy grande para determinar qué es el orden público.

Acollas, lo define diciendo que es la armonía de todas las libertades, de todos los derechos y de todos los intereses.

Todas aquellas leyes que por su fundamento reposan en concepciones consideradas como básicas para la sociedad, deben conceptuarse como leyes de orden público, dice Baudry Lacantinerie.

No se trata de una novedad; la limitación del artículo 21 era reconocida por el derecho romano en el Digesto: «privatorum conventio juri publico non derogat», aun cuando la verdadera práctica del concepto de orden público arranca del Código de Napoleón.

La idea, se ha sostenido por muchos, viene del derecho romano, y Portalis al rebatir las observaciones del tribuno Andrieux, que encontraba impreciso y obscuro el artículo 6º del Código Napoleón, decía:

Se nos acusa de haber traducido mal los textos del derecho romano. Se pretende que el «jus publicum» no es lo que nosotros llamamos el derecho público u orden público. El derecho público — dicen — es el que se establece públicamente, «public stabilitum», y que, en consecuencia, toda convención contraria a las leyes es nula, sin hacer distinción de leyes que puedan interesar o no al orden público.

«Es necesario convenir que el autor de estas objeciones no habla de traducción más que para reprochar que se ha traducido mal, pues, ¿cómo sabe él que nosotros hemos querido traducir los textos con los cuales nos compara? Es indiferente saber si en el concepto de las leyes romanas, las palabras «jus publicum», significan algunas veces las leyes escritas y solamente publicadas, por oposición a los simples usos y a las simples costumbres, que no se establecen con la misma solemnidad. Pero, lo que se trata de saber es si las palabras «jus publicum», que son empleadas muy comúnmente para expresar lo que entendemos por orden público, reciben esta significación en los textos que dicen que no se puede derogar el derecho público por convenciones privadas: «jus publicum privatorum pactis mutari non potest»; pues he ahí cómo es concebido el extracto de la ley 31 en el Digesto de Pactis: «Contra tenorem legis privatam utilitatem continentis pascisci licet»: es permitido tratar contra el terror de una ley que no toca más que a la utilidad privada de los hombres. Así, el derecho público es el que interesa más di-

rectamente a la sociedad que a los particulares, y el derecho privado el que interesa más directamente a los particulares que a la sociedad. Se anulan las convenciones contrarias al derecho público, pero no se anulan las convenciones contrarias a las leyes que no se refieren más que al derecho privado o a los intereses particulares. He aquí la máxima de «todos los tiempos».

Y este concepto de Portalis es el que ha predominado en la doctrina con Demolombe, Laurent y con Aubry et Rau.

Es cierto que la línea divisoria entre el derecho público y el derecho privado — división clásica — se va borrando cada vez más, pero es evidente que hay leyes que interesan principalmente a la sociedad y otras que interesan principalmente a los individuos. El orden público es el defensor de los intereses colectivos. Podríamos decir, que el orden público, desde el punto de vista jurídico actual, significa garantizar la armonía jurídica para la realización del derecho y de la justicia, que no podrían existir si los intereses particulares primaran sobre los intereses colectivos. De ahí que en la enunciación que hacen todos los jurisconsultos sobre las leyes de orden público, entren invariablemente las que se refieren a la higiene pública, a la salud del pueblo. Contra ellas no se puede tener derechos irrevocablemente adquiridos.

Por eso es que, con muy buen sentido, la Cámara de Diputados, dispuso que deben considerarse como de orden público las prescripciones de su sanción. De ninguna manera puede considerarse un contrato de servicios, señores juristas, que puede afectar la salud de los trabajadores, como un contrato de *compraventa* u otro cualquiera que tenga por objeto la prestación de una cosa; y no debe serlo, porque los servicios no pueden ser separados de la individualidad del obrero, que representa un valor absoluto.

No olvidemos, señores senadores, que el capital del trabajo de un pueblo es superior a su patrimonio real, de todo punto de vista, razón por la que debe estar siempre amparado por el derecho público y por el privado.

La indemnización por despido es una disposición de orden público que regula una situación desigual, la de los patrones frente a los obreros y empleados, desigualdad que, por otra parte, ha sido admitida por el señor miembro informante.

El legislador exige la insignificante carga para el patrón de indemnizar al obrero por despido, consultando sólo el interés de éste porque tiene en cuenta que el trastorno que se produce al empleado despedido es de una importancia que puede repercutir y tener carácter social.

Es cierto también, que la relativa seguridad otorgada al empleado beneficia al patrón, porque aquél en tal caso realizará su tarea sintiéndose más solidario con éste que en el caso de desamparo. Esta es otra consideración que no ha sido tomada en cuenta por los impugnadores del despacho, quienes consideran que la pequeñísima indemnización de despido perjudica al patrón, tesis sostenida hace unos instantes por el señor senador por Catamarca.

Se ha hablado tanto respecto al perjuicio que sufrirá la estructura del código con estas disposiciones ya aceptadas por la unanimidad de la Cámara de Diputados, que quiero leer a los señores senadores la opinión de profesores de derecho comercial y de jueces de comercio, respecto a este punto; así como en la parte relativa a la inconstitucionalidad de las indemnizaciones por despido, la del prestigioso profesor de derecho civil de la Facultad de Buenos Aires, doctor Raimundo M. Salvat.

El juez de Comercio de la Capital doctor Federico Cermesoni en nota que me dirigió el 13 de Septiembre dice:

Buenos Aires, Septiembre 13 de 1933.

*Señor senador nacional, doctor don Alfredo L. Palacios.*

Presente.

Ilustrado doctor y amigo:

Acuso recibo de la nota que me remite el señor encargado de la Comisión de Códigos.

Los antecedentes del proyecto sobre reformas a los artículos 154 y siguientes del Código de Comercio, llenan una verdadera laguna en nuestra legislación.

El Honorable Senado de la Nación, acaba de sancionar entre otras, dos leyes de interés vital para el comercio de la República: la ley de quiebras y la transferencia de las casas de comercio.

I. — El proyecto en discusión se refiere ya, a los empleados que equivalen a los brazos de ese conglomerado que representa a la industria y al comercio, como nervios robustos de la estructura del Estado.

Los códigos anticuados no habían vislumbrado siquiera, la forma de resolver la situación de injusticia

Septiembre 21 de 1933

CAMARA DE SENADORES

42ª Reunión. Cont. de la 29ª Sesión ord.

en que se legislaba sobre la materia, según tuve oportunidad de referirme en los fundamentos expuestos en el diario «La Razón». (Diario de Sesiones, 13 de Septiembre de 1932).

La falta de una legislación en materia de seguro para los empleados de la industria y del comercio, se agrava cuando estos son despedidos por sus patrones, especialmente cuando se trata de viejos servidores que han contribuido en forma eficiente, aunque anónima, al engrandecimiento de la empresa o del establecimiento industrial.

La ley votada por la Honorable Cámara de Diputados, ha tratado de armonizar los intereses de los patrones y empleados en el caso de despido, fijando como indemnización el medio mes de sueldo por año de servicio, con el límite de los \$ 500, computando sólo el plazo de 5 años anteriores a la ley, y con facultades de substituir tales obligaciones, por medio del seguro.

Los sueldos, en general reducidos de los empleados, impiden que pueda fomentarse el ahorro, previendo las situaciones difíciles que depara la suerte, especialmente en los casos de despido, cuando el viejo empleado ha de contribuir igualmente a la manutención de su familia.

El proyecto de la Honorable Cámara de Diputados al fijar la indemnización del medio mes de sueldo por cada año de servicio, pone reparos a los abusos en que pudieran incurrir algunos patrones que pretendan deshacerse de los empleados que han contribuido con toda una vida, al fomento de su establecimiento mercantil y de sus intereses.

Algunas legislaciones modernas presentan ensayos adelantados, sobre legislación de sociedades anónimas con participación obrera, tratando de armonizar los intereses patronales y del capital, con los que representan los empleados. La unión y armonía de los intereses y de las fuerzas, como toda verdad, significa fuerzas multiplicadas en beneficio de todos.

El proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, en cuanto sanciona la indemnización del medio mes de sueldo por cada año de servicios en caso de despido, colma un anhelo de justicia humana para los viejos servidores.

Los casos judiciales han demostrado que, viendo los imperativos exegéticos del actual Código de Comercio (artículo 154 y siguientes del Código de Comercio), la situación del empleado frente al patrón que resolvía arbitrariamente su despido, era de irritante desigualdad.

En tal situación, al empleado correspondía probar que fuera despedido por el patrón; justificativo bien difícil de llevar a cabo, pues generalmente tal acto se realiza privadamente y sin la presencia de testigos, los que en el mejor de los casos, no podrían declarar en contra de su patrón.

Que tal situación se agrava, considerando que la jurisprudencia de la Cámara Comercial ha declarado válidas las renunciaciones que los patrones hacen firmar a sus dependientes, renunciando al irrisorio mes de sobresueldo, que le concede el artículo 157 del Código de Comercio.

II. — El proyecto de la Honorable Cámara de Diputados y de la mayoría de la Comisión de la Honorable Cámara de Senadores, se refiere igualmente al privilegio general que ha de gozar la indemnización de la ley, en caso de quiebra.

Los casos de quiebras judiciales, demuestran que los créditos por sobresueldos y salarios casi nunca pueden hacerse efectivos en el estado de distribución, por que existen en la ley privilegios de pago preferente.

El proyecto, pues, debiera consagrar un concepto más amplio, disponiendo que los sueldos y salarios a que se refiere la presente ley gozan de «privilegio general, haciéndose extensiva, la preferencia con respecto a los demás acreedores, sobre las existencias del fundo comercial.»

Aprovecho la oportunidad para formular votos por la ventura personal del señor senador, repitiéndome su seguro servidor.

*Fernando Cermesoni.*

Es un juez de comercio, señores senadores. Supongo que debe de conocer bien la estructura del código que está aplicando todos los días. Es, además, profesor de derecho comercial.

El catedrático de la misma materia, doctor Amuchástegui, en nota que me dirigió el 15 de Septiembre, dice:

*Señor doctor Alfredo L. Palacios.*

*Senador nacional.*

Estimado doctor:

Acuso recibo de su atenta fecha 11 del corriente que recién hoy me es posible contestarle.

Me hace usted el honor de requerirme la opinión que como profesor de derecho comercial tengo sobre la reforma proyectada en la Cámara de Diputados y revisada en el despacho de la Comisión de Legislación del Senado, según orden del día número 21, deseando saber si la disposición del artículo 157 inciso o punto 3 proyectado en diputados, afecta algún principio esencial de nuestras leyes o perturba la economía general del Código de Comercio argentino.

No obstante las grandes lagunas que mi espíritu tiene en esta ciencia tan vasta del derecho comercial, puedo darme el gusto de responder de inmediato a su pregunta, porque ese punto ha sido tratado por mí cuando era juez de comercio de la Capital en una sentencia que usted

conoce, por haber sido publicada en la Revista de la Facultad de Derecho de La Plata cuando usted era decano y en la Revista Universitaria de esta Capital en Junio de 1928.

El señor senador por Catamarca expresaba que, a lo que él se oponía, era a que se perturbaran las tradiciones argentinas; de donde resulta que los despachos de la mayoría y de la minoría son manifestaciones de carácter antipatriótico, que traemos a este recinto, contrariando los principios «inconcusos del derecho».

El ex juez de comercio y profesor de derecho doctor Amuchástegui no lo cree así, pues expresa:

Afirmo que es un verdadero acierto, altamente patriótico, el contenido en el despacho sancionado en diputados en el sentido que analizamos, en cuanto acuerda una indemnización determinada y relacionada con los años de servicios prestados, al empleado de una casa de comercio. Y afirmo con profunda convicción que es además de gran provecho económico para el comercio y el propio país, tan afectado por esta serie de problemas, siendo por último conveniente en alto grado para la justa y pacífica solución que todos anhelamos en esta clase de asuntos de carácter económico jurídico. Pienso, además, con entera seguridad, que dicha disposición del artículo 157, punto 3º de la sanción de diputados, no afecta al sistema general del código ni vulnera el principio de la no retroactividad de las leyes establecido en el Código Civil.

Debo significar ante todo que cuando se tratan estas materias que interesan al comercio de una nación — problema económico — no debe acudir al Código Civil para juzgar de la relación jurídica que se crea o para interpretar sus disposiciones. El derecho comercial es jurídico, pero también es económico. Siendo como es la norma de las instituciones y de las relaciones jurídicas que se crean en el campo de la circulación de la riqueza, fenómeno puramente económico, no puede ni debe aplicarse el criterio individualista asentado por Vólez Sársfield en la legislación civil para regir las relaciones derivadas del contrato de locación de servicios, asunto esencialmente civil, distinto en absoluto de las relaciones jurídico económicas creadas en la industria y el comercio, que han sido regladas ya en gran parte por la legislación moderna argentina y que formarán en el futuro, como acontece en otras naciones, el verdadero Código del Trabajo, como usted lo sabe muy bien por haber colaborado, proyectado y hecho sancionar varias de esa especie.

Las relaciones entre patrón y empleado son relaciones mercantiles. El despido del empleado es el cese de esa relación. Debe ser reglamentado de acuerdo con los principios que informan estas leyes. Su deficiente reglamen-

tación ha originado los conflictos que conocemos. Muchas injusticias han debido soportar los empleados a causa de ello. Yo traté en el fallo recordado en que cometían varias empresas poderosas del país, haciendo firmar al empleado, al entrar a prestar servicios, la renuncia de la remuneración que acuerda el actual código. Y la declaré nula, aplicando los principios jurídicos del propio Código Civil en materia de libre contratación y los económicos que informan ese orden de vinculación.

Es antijurídico sostener que la disposición proyectada en diputados es inconstitucional, porque afecta el principio de la no retroactividad de las leyes. Primeramente, la Constitución nacional nada establece al respecto, sino el Código Civil.

En segundo lugar, ese principio no queda afectado por la futura disposición, porque ésta significa únicamente una prescripción que debe regir para todo caso de despido que se produzca durante la vigencia de la ley. Los despidos anteriores a la misma no serán regidos por la nueva ley, evidentemente. ¿Dónde se ha vulnerado, pues, el principio de la no retroactividad? Por otra parte, fuerza es reconocer que en el momento actual ya se han despedido todos los empleados que la necesidad o la crisis han obligado a hacerlo, y que si se producen nuevos, justo es que los empleadores indemnicen, siquiera sea en mínima parte, el gravísimo daño que causa a un viejo servidor el hecho de dejarlo en la calle, sin otro hábito de trabajo ni otros conocimientos que los que aprendió o aplicó en favor de su patrón para el enriquecimiento del mismo, ya que hasta el día no se ha visto nunca el enriquecimiento del pobre empleado.

Sobre todo, al analizar este punto, no olvidemos que lo que hace la ley nueva es sólo ampliar el monto de la indemnización, haciéndola más humanitaria y justa, propósitos de la misma ley vieja, según todos los autores. ¿Cómo puede sostenerse, pues, que si se acuerda un mes, la ley es buena y arreglada a los principios, y si se acuerda más, no lo sea?

Pero, recordemos, señor senador, que en esta materia no hay derechos adquiridos, por tratarse de una disposición de orden público. El artículo 3º del Código Civil establece que las leyes no disponen para lo futuro ni pueden alterar los derechos adquiridos, fundamento de los sostenedores de la tesis contraria, pero el mismo código estatuye en su artículo 5º que nadie puede tener derechos adquiridos contra una ley de orden público. Y es evidente que esta sabia regla resuelve el conflicto que analizamos con fuerza definitiva.

Ya nadie discute que en materia mercantil todo lo que afecte el interés del comercio es de orden público, por tener la circulación de la riqueza — fin u objetivo del comercio — una enorme repercusión en la prosperidad y bienestar de los pueblos. En la

sentencia recordada lo demostré en forma concluyente, enumerando varias disposiciones fundamentales del Código de Comercio que justificaban dicha tesis. No las reproduzco por no hacer demasiado largo esta carta, pero usted puede verlas en ese folio.

Por ello pienso que la remuneración que se proyecta en diputados no altera el sistema general del código, ni vulnera ningún principio fundamental del mismo, ni siquiera del Código Civil, no aplicable sino por excepción en este orden de relaciones. Agrego que la disposición aludida es necesaria en el país para cortar abusos ineficaces, y rendirá muchos bienes, pues resuelve en forma equitativa y humana una difícil situación del empleado de comercio, sujeto por deficiencias de la ley actual al capricho o a la voluntad unilateral de su patrón.

No dudo que este criterio sano y patriótico primará en el Senado, y así se habrá hecho un bien a nuestras instituciones mercantiles, anticuadas ya, atento nuestro progreso continuo en materia industrial.

Con tal motivo me repito de usted affmo. amigo y seguro servidor.

*José Antonio Amuchástegui.*

Es realmente interesante que hable así un profesor de derecho comercial y ex juez de comercio. Yo deseo que íntegramente se incorporen al Diario de Sesiones las notas que entrego.

**Sr. Presidente** (Campos). — Así se hará, señor senador.

**Sr. Palacios.** — El doctor Raimundo Salvat, tan respetado por maestros y alumnos en nuestra tradicional casa de estudios, me ha enviado una extensa nota en la que hace un estudio muy interesante respecto de la doctrina en cuanto se refiere a la retroactividad, con relación al artículo de despido.

Dice la nota:

Buenos Aires, 14 de Septiembre de 1933.

*Señor senador nacional, doctor Alfredo L. Palacios.*

Mi estimado y distinguido doctor:

Conforme le expresé en nuestra conversación de anoche, me es satisfactorio consignar a continuación la opinión que usted me ha hecho el honor de requerirme, sobre el inciso 3º del proyecto de reforma del artículo 157 del Código de Comercio, en relación con el principio de irretroactividad de las leyes, consagrado en el artículo 3º de nuestro Código Civil. La base de esta disposición está en la distinción entre

derechos adquiridos y simples esperanzas, cuyo origen o alcance creo conveniente recordar para el mejor examen de la cuestión.

El Código Napoleón, en su artículo 2º, se había concretado a establecer el principio de que las leyes no tienen efecto retroactivo, pero quedaba por determinar cuándo había efecto retroactivo y cuándo no. Los primeros comentaristas de aquel código, enseñaban que para ello era necesario distinguir entre derechos adquiridos, es decir, derechos ya incorporados al patrimonio individual, y simples esperanzas de derechos, que todavía no se habían incorporado a él. La idea fué después precisada por los comentaristas de la segunda época, los cuales enseñaron que para que un derecho pudiera considerarse adquirido y quedase en consecuencia a cubierto de todo cambio de legislación, era preciso que el derecho hubiera sido «ejercido». En una tercera evolución, la doctrina francesa, representada principalmente por el jurista Marcel Planiol, ha dado un paso más adelante, substituyendo la distinción clásica entre derechos, por esta otra: hay retroactividad cuando la ley actúa sobre el pasado, sea para apreciar las condiciones de legalidad de un acto, sea para modificar o suprimir «los efectos de un derecho ya realizado»; fuera de esto, no hay retroactividad y la ley puede modificar los «efectos futuros», de hechos o de actos anteriores, sin ser retroactiva.

Nuestro Código Civil, después de establecer en el artículo 3º que las leyes no pueden tener efecto retroactivo, ni alterar derechos adquiridos, expresamente consagra, en el título final, la distinción entre derechos adquiridos y esperanzas, como se desprende del artículo 4.044, concebido en los siguientes términos: «Las nuevas leyes deben ser aplicadas a los hechos anteriores, cuando sólo priven a las particulares de derechos que sean meros derechos de expectativa; pero no pueden aplicarse a los hechos anteriores, cuando destruyan o cambien derechos adquiridos.» Además, aceptando el criterio de los comentaristas franceses de la segunda época, agrega: «Las leyes nuevas deben aplicarse, aun cuando priven a los particulares de facultades que les eran propias, y que aun no hubiesen ejercido, o que no hubiesen producido efecto alguno.» Como lo he explicado en mi *Tratado de Derecho Civil Argentino*, parte general, las palabras «no ejercidas» se refieren a todos aquellos casos en que el derecho no pueden hacer sin el concurso de la voluntad del individuo, por ejemplo, en materia de contratos, testamento, derechos reales, etcétera; las palabras «que no han producido efectos algunos», se refieren a los casos en que el derecho nace como consecuencia de ciertos hechos sin intervención de la voluntad del individuo, por ejemplo, en materia de indemnización, de perjuicios causados por delitos o casi delitos, de sucesión *ab intestato*, etcétera. (Op. cit., 5ª edición, N° 289 y sig., texto y notas).

Ahora bien, como también lo he hecho notar en dicha obra, dentro del sistema de nuestro Código Civil, la determinación del alcance práctico del principio de irretroactividad ha quedado cristalizada en textos legales, expresos y categóricos. En el derecho francés, después de la doctrina enseñada por los juristas de la segunda época, se ha podido dar un paso adelante y llegarse a la doctrina de Planiol, más clara en la forma de explicarse y más fácil en su aplicación. Pero en nuestro código, cristalizada en sus textos la distinción entre derechos ejercidos y no ejercidos, es a ella y a las disposiciones que le complementan, que debemos atenernos para decir cuándo una ley tiene o no efecto retroactivo.

En el caso que motiva su consulta podría decirse que la aplicación de la nueva ley a los actuales empleados dependientes de comercio, etcétera, importaría violar el principio de irretroactividad, porque vendrían a modificarse las condiciones legales existentes al tiempo de la celebración del contrato.

En otros términos, podría decirse que, de acuerdo con la ley vigente, al celebrarse dichos contratos, el patrón estaba facultado para despedir a los empleados, dependientes, etcétera, en condiciones diferentes de las que la ley determina y que, en consecuencia, esta última va a tener un efecto retroactivo al aplicarse a tales contratos.

Me parece que esta solución no podría ser aceptada. Primero, porque una cosa es el contrato celebrado entre el empleador y los empleados, dependientes de comercio, etcétera, y otra, la cesantía, que es una facultad que aquél se reserva y que puede ser ejercida por diferentes causas. Segundo, porque en tanto que esa facultad no haya sido ejercida no hay, de parte del empleador, un derecho adquirido para despedir a sus empleados en tales o cuales condiciones. Tercero, porque la modificación de las condiciones en que esa facultad puede ser ejercida sólo recae sobre efectos futuros del contrato y, por tanto, no se afecta un derecho ejercido.

Podría aun agregar otro aspecto del asunto resulta del proyecto de ley que se declara nula toda convención que deje sin efecto o reduzca las obligaciones establecidas en los artículos 1º, 2º y 3º, inciso 6º de este último.

Se desprende de aquí que el legislador considera estas disposiciones de orden público y por consiguiente, desde este punto de vista, el principio de irretroactividad carecería de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de nuestro Código Civil.

Con el aprecio y la consideración distinguida de siempre, lo saluda cordialmente su atto. y afmo. S. S.

Raimundo Salvat.

Sintetizando: Se trata de una cuestión de orden público porque afecta, señor presidente, a la salud del pueblo.

La salud del obrero debe cuidarse hasta por razones económicas, no ya sólo, por razones humanas o filosóficas, al considerar la vida como un valor absoluto; al conceptuar al hombre como *un fin en sí*, según la fórmula kantiana. Por razones materiales la salud del obrero tiene una significación económica. El hombre que desarrolla una actividad útil enriquece a la colectividad; es lógico, pues, por lo menos asimilarlo a un motor cuya integridad debemos vigilar. Hay que ver el celoso cuidado del capitalista con el motor metálico, y la despreocupación total con el motor humano, con la máquina que — como dice Rouskin — tiene como fuerza motriz un alma.

La capacidad de rendimiento del obrero depende de su estado de salud. Produce más el obrero más sano; produce menos el obrero inválido, enfermo o anciano. Parece razonable, pues, que la vida y la salud del trabajador esté controlada por el Estado. Pero nuestros estadistas sólo se interesan por las clases pobres, cuando se producen conmociones, cuando hay estallidos, cuando las reivindicaciones tienen un carácter violento; y es claro, que esto es la negación de la norma de gobierno.

Parece que se ignorara la grave cuestión de sanidad social que ha planteado el proletariado; parece que se ignorara que es una obra de estadistas no esperar los momentos de convulsión para acordarse de las leyes tuitivas de los trabajadores; parece que no se supiera que el desarrollo del sistema productivo impone la aparición de una serie de instituciones jurídicas nuevas que deslinden de una manera clara y precisa la diferente posición de las fuerzas en lucha. No hemos omitido sacrificios para cuidar meticulosamente la cría del ganado. Ya es hora de preocuparnos de la cría del hombre, que es lo que en realidad va a proporcionar la grandeza y el vigor de nuestro pueblo.

Quiero repetir la frase de Stuart Mill, pronunciada antes de la guerra por Lloyd George, «No se puede hacer una gran nación con hombres pequeños.»

La vida del hombre es un capital; hablo como si fuera un industrial. La vida del hombre es un capital, el *life capital* de los ingleses. Su valor, insisto en ello, está determinado por la capacidad de rendimiento y la capacidad de rendimiento depende de la salud física y espiritual del obrero.

Septiembre 21 de 1933

CAMARA DE SENADORES

42ª Reunión. Cont. de la 29ª Sesión ord.

Terminaré, haciendo votos fervientes para que no puedan ser aplicables jamás a nosotros, las palabras de Ruskin, según las cuales *fabricamos de todo menos hombres. Tejemos las telas, refinamos el azúcar, imprimimos el libro, pero somos incapaces de refinar y de mejorar, cultivándola, una sola inteligencia humana!*

Nada más. (¡Muy bien! ¡Muy bien!).

10

**CUARTO INTERMEDIO**

**Sr. Presidente** (Campos). — Se me informa que no hay número en la casa.

Invito a la Cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Era la hora 20 y 25 minutos.

**RAMÓN COLUMBA,**  
Director de Taquígrafos.